

JUNIO 20 DE 1919

15.<sup>a</sup> REUNIÓN — 13.<sup>a</sup> SESIÓN ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL SR. D. ARTURO GOYENECHÉ

DIPUTADOS PRESENTES: Aldao Ricardo, Anquín Ireneo de, Arámburu Juan B., Arancibia Rodríguez A., Aranda Macedonio, Araya Rogelio, Arce José, Atencio Juan V., Avellaneda Marco Aurelio, Avellaneda Nicolás A., Barceló Alberto, Becú Carlos A., Beiró Francisco, Bermúdez Manuel A., Berrondo Valentín, Bravo Mario, Bunge Augusto, Cabrera Enrique, Carranza Wenceslao C., Carrasco Alejandro M., Casás José O., Cordero Octavio, Costa Julio A., Demaría (hijo) Mariano, Dickmann Enrique, Escobar Adrián C., Fernández Jacinto, Ferrarotti Juan Luis, Ferreyra (hijo) Andrés, Galíndez Francisco R., Garat Damián P., Garro Allende Juan E., Gatica Teófilo I., Gibert Pedro F., González José Antonio, Goyeneche Arturo, Isnardi Arturo, Jiménez Beltrán Dámaso, Lagos Lauro, Laurencena Miguel, Lehmann Guillermo, Maidana Julián, Martínez Enrique, Melo Carlos F., Méndez Casariego Alberto Molina Víctor M., Moreno (hijo) Rodolfo, Mosca Enrique M., O'Farrell Juan, Oliva Moisés J., Padilla Ernesto E., Pagés Pedro T., Pérez Virasoro E., Pradère Carlos M., Puch Angel E., Quiroga Marcial V., Raffo de la Reta Julio C., Repetto Nicolás, Riú Francisco A., Rodríguez Alfredo, Rodríguez Carlos J., Rodríguez Jorge Raúl, Sánchez Bustamante T., Sánchez Sorondo Matía G., Santamarina Antonio, Solanet Pedro, Solari Benjamín T., Tamborini José P., Usandivaras Agustín, Vaca Narvaja Jesús, Valle Delfor del, Vergara Valentín, Vidart Roberto, Videla Horacio C., Villarroel Agustín J., Zalazar José María. DIPUTADOS AUSENTES: CÓN 1;—EN 14: Breard Eugenio E., Cabrera Anibal, Gallegos Moyano Carlos, Leguizamón Arturo, Páez José E., Sosa Leopoldo, Vera Octaviano S. CÓN 15: Agote Luis, Bonifacio Benjamín, Carosini Alberto H., Daneri Luis M., Davel Ricardo J., Hernández Sabá Z., Jaramillo José M., Justo Juan B., Padilla Eduardo, Rubilar Francisco, Tomaso Antonio de. S: 15: Caballero Ricardo, Caracocha Pedro, Cornejo Julio, Cornet Pedro L., Corvalán Santiago E., Hernández Diógenes, Iriondo Néstor de, Martínez José María, Martínez Zuvería Gustavo, Massa Arturo H., Montes José Antonio, Moreno J. Alejandro, Mouesca Eduardo M., Remonda Mingrand F., Robín Castro Napoleón, Rougés León.

## SUMARIO

- 1.—Se da por aprobada el acta de la sesión anterior.
- 2.—Asuntos entrados.
- 3.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado doctor Nicolás A. Avellaneda, sobre registro de mandatos.
- 4.—Proyecto de ley del señor diputado doctor Julián Maidana, por el que se acuerda pensión a la señorita Petrona del Barco.
- 5.—Proyecto de ley del señor diputado doctor Adrián C. Escobar sobre nacionalidad argentina.
- 6.—Proyecto de ley de varios señores diputados, reproducido por el doctor Rodolfo Moreno (hijo) sobre aplicación del artículo 855 del código de comercio para los casos de transporte terrestre.
- 7.—Proyecto de ley del señor diputado doctor Rodolfo Moreno (hijo) sobre modificación del presupuesto de los tribunales federales de La Plata.

- 8.—Proyecto de ley del señor diputado doctor Carlos J. Rodríguez por el que se concede un subsidio a la Federación de football de Río Cuarto.
- 9.—[Proyecto] de ley de varios señores diputados con fundamentos del doctor Ernesto E. Padilla, por el que se autoriza la inversión de 500.000 pesos en gastos de sanidad y profilaxis interna y en la habilitación de estaciones sanitarias en Salta, Jujuy y Catamarca.
- 10.—Licencias para faltar a sesiones concedidas a los señores diputados doctores Leopoldo Sosa y Carlos Gallegos Moyano.
- 11.—Continúa la consideración del despacho de la comisión de justicia en los proyectos de ley de varios señores diputados por el que se reglamenta el ejercicio de la procuración.

—En Buenos Aires a 20 de junio de 1919, siendo las 3 y 45 p. m., ocupan sus asientos en el recinto los señores diputados en quórum legal.



## 11

## EJERCICIO DE LA PROCURACION

**Sr. Rodríguez (A.)** — Pido la palabra.

Entiendo que corresponde seguir tratando la reglamentación del ejercicio de la procuración, asunto sobre el cual ya escuchamos el informe general, así como la opinión de varios señores diputados. Creo que procede votar ahora en general.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — ¿El señor diputado hace indicación en ese sentido?

**Sr. Rodríguez (A.)** — Sí, señor.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — En consideración la indicación del señor diputado por Buenos Aires, que consiste en continuar tratando el despacho de la comisión de justicia sobre reglamentación del ejercicio de la procuración.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Corresponde votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y es aprobado.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Está en consideración en particular.

**Sr. Fernández.** — Pido la palabra.

Hago indicación en el sentido de que artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Habiendo asentimiento, así se hará, y si no se hace observación, se dará por aprobado el artículo 10.

**Sr. Maidana.** — Podría darse un momento de tiempo para la lectura de los artículos.

**Sr. Bermúdez.** — Hago indicación para que la secretaría dé lectura de los artículos.

—Se lee el artículo 10.

**Sr. Tamborini** — Pido la palabra. Hago indicación para que se incluya un quinto inciso, comprendiendo a los

contadores públicos con título nacional.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. González.** — No, señor presidente; mantiene su despacho.

**Sr. Maidana.** — Desearía aclarar el inciso 30. de este artículo.

Entiendo que pueden ejercer la representación en juicio los escribanos nacionales que no estén con registro; que no tengan protocolo, es decir, que no estén en ejercicio de la profesión.

**Sr. Ferrarotti.** — Hay otro artículo que lo establece.

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — Es el 12.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Propongo que se agregue al inciso 3.º del artículo 1.º lo siguiente: "que no ejerzan la profesión de tales", porque los escribanos en tal caso optarían por ser procuradores; tienen un título superior al de procurador y por lo tanto la idoneidad necesaria para el ejercicio de esta profesión; pero no pueden pretender — si ejercen en alguna forma la profesión de escribano — ejercer a la vez la de procurador.

**Sr. Fernández.** — Está previsto en el artículo 12.

**Sr. González.** — Entiendo que está bien aclarado en el artículo 12.

**Sr. Melo.** — No está bien expreso, sino más restringido; y si el pensamiento de la comisión coincide con el mío no debe tener inconveniente en aceptar el agregado que propongo; con el inciso 3.º quedaría así: los escribanos nacionales que no ejerzan la profesión de tales.

**Sr. Fernández.** — No puede haber inconveniente.

**Sr. Vergara.** — No es necesario; está en el artículo 12.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — La observación del señor diputado Melo no tiene razón de ser.

Cuando se habla de los escribanos nacionales se refiere a los que son funcionarios, es decir, a aquellos que no tienen registro: esos son los únicos que pueden ejercer la procuración. El que está a cargo de un registro ejerce una función pública conferida por el estado y no puede desempeñar otra



función sino esa que le está confiada. Se refiere a los escribanos que no ejercen la profesión, que tienen el título y que por afinidad de estudios tienen igual competencia que un procurador diplomado.

**Sr. Melo.** — Tanto el señor diputado Fernández como el señor diputado González no han penetrado el sentido de mi observación, que es otro.

La comisión ha tenido el pensamiento de extender el ejercicio de la profesión a todos los escribanos nacionales que no ejerzan la profesión de tales, según se desprende del artículo 12; pero aquí no habla sino de los escribanos nacionales en general. Entonces, para aclarar el concepto y concordarlo con el del artículo 12, no veo inconveniente en que el agregado que he propuesto sea aceptado.

**Sr. Maidana.** — Me parece que la comisión no puede tener inconveniente en aceptar la aclaración que hace el señor diputado Melo porque cuanto más clara sea la ley, mejor.

**Sr. González.** — El orden de los factores no altera el producto. Habría que agregar a ese artículo lo que se dispone en el 12.

**Sr. Vergara.** — Pero se deja el artículo 12.

**Sr. González.** — Me refiero a lo que dice el artículo 12, respecto a los escribanos públicos que optaran por el ejercicio de la profesión.

Establece que además estarán obligados a acreditar su respectivo título y presentar el certificado correspondiente al depósito.

**Sr. Vergara.** — Se hace un agregado.

**Sr. Melo.** — No hay nada que agregar.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Siendo aceptado por la comisión forma parte del despacho.

Está en consideración el nuevo inciso propuesto por el señor diputado por la capital, como inciso 5o., referente a los contadores públicos.

**Sr. Vergara.** — Yo me voy a oponer.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — La comisión no acepta.

**Sr. Maidana.** — Votaré en contra del agregado del inciso propuesto.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Se va a votar el agregado propuesto como inciso 5o.

—Se vota, y resulta negativa.

—En discusión el artículo 2o.

**Sr. Vergara.** — Pido la palabra.

En este largo artículo la comisión de justicia no viene en definitiva sino a proyectarnos un registro en que se van a inscribir todos los procuradores matriculados o que estén en condiciones. Esto no es lo fundamental del registro.

Lo fundamental exige que se anote la situación en que se encuentran los procuradores durante el ejercicio de su profesión con relación a la reglamentación que se proyecta. Así por ejemplo si un procurador ha sido suspendido en el ejercicio de sus funciones, lo lógico es que eso se anote en el registro; si se le ordena que reintegre la fianza por haber servido parte de ella para responder a algunas costas o fallas en el desempeño de su mandato, lo justo es que también se inscriba.

De manera que me permitiría proponer a la comisión de justicia que al final del apartado primero se agregaran las siguientes palabras: "En este registro se anotarán también las suspensiones que se decreten, el estado de las fianzas, los reintegros que se les ordenen a los procuradores y demás informaciones que en su reglamentación establezca el poder ejecutivo".

Con este agregado el registro sería práctico y útil, porque lo esencial, repito, no es conocer la nómina de los procuradores, sino saber el estado en que se halla su responsabilidad moral y material.

**Sr. González.** — Pido la palabra.

La situación a que se refiere el señor diputado está prevista en el artículo 9 del despacho de la comisión, que establece que todas las medidas disciplinarias, multas, condenas, etcétera, serán inscriptas en el registro que debe llevarse de conformidad con la disposición del artículo 2o.



Podría leerse, en todo caso, el artículo 9.

**Sr. Vergara.** — Perfectamente; pero si estamos hablando del registro en un artículo tan extenso como el que ha proyectado la comisión, lo lógico es establecer lo que yo digo.

He leído el artículo 9. Tal como yo lo proyecto, es como está en la ley de procuración de la provincia de Buenos Aires, que posiblemente la comisión ha tenido por delante, porque su despacho es casi su reproducción.

De manera que yo no veo por qué se han de hacer estas modificaciones. Es la misma observación que hace un momento ha hecho el señor diputado Melo.

**Sr. Bermúdez.** — En el artículo 9o. está perfectamente previsto el caso.

**Sr. González.** — Con la proposición del señor diputado, haríamos un artículo muy largo y no ordenado.

**Sr. Vergara.** — Ya es demasiado largo el artículo.

**Sr. González.** — Entonces, en este artículo 2o., habría que prever todas las situaciones del artículo 9o.

**Sr. Vergara.** — Me voy a permitir decir al señor diputado que es más metódico que en este artículo que habla de registro, se diga para lo que sirve. Si por el artículo 2o. la comisión crea el registro y dice que sirve para anotar la nómina de los procuradores, lo lógico es que se diga en él lo que establece el artículo 9o.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Pido la palabra.

Rogaría a los señores diputados que no hicieran observaciones aisladas sobre artículos que han sido consignados en el despacho después de un meditado y detenido estudio por parte de la comisión.

**Sr. Vergara.** — Pero, señor diputado; esa ley de reglamentación de la procuración es muy antigua. En el año 1913 el doctor Jofré, para la provincia de Buenos Aires, proyectó una ley más o menos igual a esta.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Pero ninguna ley tiene las reformas de este proyecto.

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — En 1902

presenté el proyecto a que se refiere el señor diputado por Buenos Aires en el senado de esa provincia.

**Sr. Presidente** (Goyeneche) — Ruego a los señores diputados no interrumpam.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Quería decir a los señores diputados que este proyecto es un organismo combinado y perfecto que ha tomado las ideas centrales de muchos proyectos, eligiendo lo mejor de ellos, y lo que consultaba más los intereses públicos, el saneamiento de la investidura procuratoria, a fin de tener la realidad de una justicia afianzada.

Esta es una reforma fundamental que se debe al talentoso diputado por la provincia de Buenos Aires, doctor Moreno, que ha iniciado esta reforma estableciendo un registro y poniéndolo bajo la superintendencia inmediata de la suprema corte nacional.

Se trata de establecer una ley del ejercicio de la procuración y de la representación en juicio para toda la república, no sólo para la capital federal. Estoy seguro de que tal como está formulado el proyecto consulta los verdaderos intereses nacionales, y será una ley nacional que servirá de modelo a toda la república.

**Sr. Maidana.** — En el orden federal solamente, señor diputado.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Sí, para el orden federal y dentro de este orden para toda la república, y en seguida las provincias lo adoptarán, porque es la ley más adelantada.

**Sr. Vergara.** — ¿Qué tiene que hacer la nación en esta cuestión, si las provincias en este sentido están ya bastante adelantadas?

**Sr. Jiménez Beltrán.** — La observación de detalle que anteriormente hizo el señor diputado por la provincia de Buenos Aires está prevista en el proyecto. No sólo la nómina de procuradores sino también las suspensiones, las eliminaciones y las reintegraciones del depósito deben estar anotadas allí. Si antes de las veinticuatro horas un procurador no reintegra su depósito, queda suspendido de inmediato. Siempre debe permanecer intacto el depósi-



to, que constituye la verdadera garantía que habilita para el ejercicio de la procuración.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

Yo creo que con un agregado insignificante que se hiciera al artículo 9.º que voy a permitirme proponer al señor diputado por Buenos Aires doctor Vergara, quedaría perfectamente aclarado el concepto. En la Última parte del artículo 9.º, donde dice: “ Los tribunales comunicarán al funcionario encargado del registro de matrículas las declaraciones de incapacidad, los autos de prisión, las condenas, las suspensiones, multa o apercibimientos decretados contra procuradores inscriptos, a los efectos de su anotación en el registro...”, agregar las palabras: “a que se refiere el artículo 2.º”

Es exactamente la observación que hace el señor diputado. Lo que él quiere es consignar en el artículo 2.º que la inscripción de todos esos datos debe hacerse en el registro. ¿No es ese el pensamiento?

**Sr. González.** — Eso está expresamente determinado en el artículo 9.º. Con hacer referencia a que todos esos actos deberán inscribirse en el registro a que alude el artículo 2.º, quedaría perfectamente llenado el propósito del señor diputado.

**Sr. Vergara.** — No, señor diputado; he leído también el artículo 9.º; le agradezco mucho al señor diputado. Pero entiendo que es más de orden, dentro de una ley, establecer este requisito en el artículo 2.º que es donde se habla de la creación de este registro.

**Sr. Bermúdez.** — Exactamente, señor diputado. Lo que se va a hacer es anotar en ese registro, poniendo simplemente que todos estos datos se consignarán en él.

**Sr. Vergara.** — En la ley de la provincia de Buenos Aires, que seguramente es la que ha servido de modelo a este proyecto, se establece como yo lo digo en este momento.

**Sr. Bermúdez.** — Es cuestión de orden del artículo; el pensamiento es prácticamente el mismo.

**Sr. González.** — No solo la ley de la provincia de Buenos Aires, si-

no también otras leyes reglamentarias de la procuración, establecen lo mismo.

**Sr. Vergara.** — Digo la provincia de Buenos Aires, porque tiene una ley exactamente igual a ésta, que en su conjunto no varía.

**Sr. González.** — ¡Si todas las leyes provinciales en esta materia son análogas!

Yo aceptaría en nombre de la comisión, las reformas que se propusieran de un carácter fundamental; pero si, en definitiva, las enmiendas propuestas significan lo mismo que está dicho en el despacho de la comisión, y sólo se introduce un cambio de redacción, que no modifica en lo más mínimo el pensamiento, yo no puedo aceptar, porque, como decía muy bien el señor diputado por Santiago del Estero, este despacho ha sido perfectamente meditado, no sólo en su fondo, sino también en la forma de redacción.

Por eso en nombre de la comisión, debo insistir en los términos del despacho, porque, en definitiva, el agregado propuesto por el señor diputado está debidamente previsto en otro artículo.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — ¿El señor diputado no hace observación a la primera parte del artículo?

**Sr. Vergara.** — Yo insisto, señor presidente, en que, al final del primer apartado del artículo...

**Sr. Presidente.** (Goyeneche). — Permítame el señor diputado. La secretaría ha tomado nota, pero él no se opone a la primera parte del artículo.

**Sr. Vergara.** — No, señor presidente; de tal manera que no hay observación respecto a la primera parte.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — La comisión no acepta, porque incurriría en contradicciones.

**Sr. Vergara.** — Voy a leer las palabras: “En este registro se anotarán las suspensiones que se decretan, estado de las finanzas, la vigilancia de los reintegros y demás informaciones que, en su reglamentación, lo estime conveniente el poder ejecutivo”, con lo cual no tendría objeto el artículo 9.º.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — No habiendo habido observación al artículo 2.º se da por aprobado.



En consideración el agregado que propone el señor diputado por Buenos Aires, de que se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Zambrano). — Como segunda fracción del artículo 2.º, entre la primera fracción y la segunda del despacho de la comisión, la siguiente: “En este registro se anotarán las suspensiones que se decreten, estado de las finanzas, la vigilancia de los reintegros y demás informes que en su reglamentación estime conveniente el poder ejecutivo”.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Se va a votar este agregado.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Queda sancionado el artículo 2.º del despacho de la comisión.

—En discusión el artículo 30.

**Sr. Rodríguez (A.)** — Pido la palabra.

Voy a hacer indicación, buscando un término medio en lo que respecta al monto exigido por este artículo, de que sea de 3.000 pesos, tanto para la capital como para los territorios nacionales.

**Sr. González.** — La comisión insiste en su despacho.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Me parece que sería justo admitir como agregado a este inciso 4.º, en el primero y segundo párrafos, después de las palabras “en efectivo” y “moneda nacional” respectivamente, lo siguiente: “o una primera hipoteca por la misma suma”.

Si se admite el depósito en efectivo o su equivalente en títulos, debe admitirse la constitución de una primera hipoteca por la misma cantidad, y hasta creo que también sería conveniente agregar “o dar fianza de persona de responsabilidad por esa cantidad”.

**Sr. Ferrarotti.** — Fianza personal renovable cada dos años.

**Sr. Melo.** — Acepto en esa forma.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

Voy a proponer dos agregados al artículo 3.º del despacho de la comisión.

Me doy cuenta de cuáles son los pro-

pósitos que tiene la comisión al establecer en el inciso 4.º de este artículo el depósito en efectivo de cinco mil pesos, o su equivalente en títulos de crédito público nacional, y también alcanzo a comprender los requisitos de capacidad que se exige a los procuradores para entrar al ejercicio de la profesión.

Pero la cámara deberá comprender también que la sanción de la ley determinará de inmediato un cambio brusco en las condiciones generales en que hasta ahora se ha ejercido la profesión, y sin que la comisión sea obligada a apartarse de las normas fundamentales que han guiado su despacho, podría quizás aceptar un temperamento transitorio hasta tanto las personas que van a continuar ejerciendo esa profesión pudieran amoldarse a las exigencias contenidas en este artículo.

Las proposiciones que formulo son las siguientes. Acepto la cláusula cuarta que dice: “Constituir a la orden del presidente de la suprema corte, en la capital federal, un depósito de cinco mil pesos moneda nacional en efectivo o su equivalente en títulos de crédito público nacional o en cédulas hipotecarias argentinas, etcétera, etcétera”; pero desearía que la comisión aceptara también, en virtud de las consideraciones que he dado, un agregado que determinara que durante el primer año de vigencia de la ley el depósito en efectivo podrá ser substituído por el depósito en caución de un título de propiedad de valor equivalente.

En cuanto a la capacidad exigida o a la competencia profesional que debe ser acreditada, a falta de título universitario, por el título de doctor en jurisprudencia, o por certificado expedido en forma por las facultades universitarias de la nación, propondría, —porque es sabido que la enseñanza de estas materias todavía no está organizada en las universidades de modo que esos institutos puedan expedir títulos de procurador, propondría que el título universitario pudiera ser suplido también por un examen de competencia rendido ante la cámara de lo civil



de la capital, de acuerdo con el programa que la misma cámara formule y por un término no mayor de dos años.

Bastaría recordar que los tribunales superiores de la capital federal, durante muchísimo tiempo recibían los exámenes de competencia para otorgar los títulos de escribano; y no veo inconveniente para que, con carácter transitorio, desde luego, por el término de dos años, las mismas cámaras estuvieran en condiciones de expedir títulos de competencia de procurador, hasta tanto las universidades organicen los estudios correspondientes a esta rama de las actividades jurídicas.

Las dos modificaciones al inciso cuarto, que propongo, serían: primero, durante un año podrán sustituirse las cantidades en efectivo por el depósito en caución de un título de propiedad de valor equivalente; y en cuanto a la capacidad profesional, cuando no haya título universitario, podrá ser acreditada la competencia por un examen rendido ante la excelentísima cámara de apelaciones en lo civil de acuerdo con programas que la misma cámara establecería.

**Sr. Maidana.** — ¿Si me permite el señor diputado?

La última parte de la proposición del señor diputado Bravo, según la cual las cámaras de apelaciones en lo civil otorgarían el título de aptitud profesional, creo que está salvada con el inciso b) del proyecto, donde se establece el examen previo ante las universidades del país de las materias codificadas.

**Sr. Bravo.** — La observación del señor diputado es aceptable, pero no es justa, porque debe saber que para dar examen en las facultades, a no ser que ellas establecieran cursos libres y especiales, se requiere tener el título de bachiller y llenar ciertos requisitos para ingresar a sus aulas, lo que significa un tiempo más o menos largo. Por esta circunstancia, sin desconocer la importancia de la cláusula del despacho de la comisión, me permito solicitar este interinato de dos años, para que las personas que no estén en con-

diciones de ajustarse a las prescripciones estrictas de la ley, puedan rendir un examen de competencia ante las cámaras de lo civil, de acuerdo con los programas que las mismas cámaras formulen.

**Sr. Maidana.** — Esa indicación del señor diputado puede abrir la puerta para que en las provincias, donde hay tantas complacencias personales...

**Sr. Bravo.** — No señor diputado, me refiero a la cámara de apelaciones de la capital federal.

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — Pido la palabra.

La facultad de derecho ha dictado hace varios años una ordenanza estableciendo un curso de procuradores que dura dos años. De modo, que no veo por qué tendrán que ir a rendir examen los aspirantes a obtener el título de procurador ante la cámara de apelaciones, cuando pueden rendirlo ante esa facultad, que es el instituto mejor habilitado para tomar esos exámenes, pues es sabido que en todo lo que se refiere a la enseñanza universitaria, las instituciones más competentes son las que constituyen la universidad.

Por otra parte, el antecedente que recuerda el señor diputado, de que antiguamente las cámaras tomaban exámenes de escribanos, es sabido que ha dejado una experiencia bastante mala.

**Sr. Maidana.** — Desastrosa en muchos casos.

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — Y además del inconveniente que acabo de señalar, habría otro más grave, y es que las cámaras, que de por sí tienen mucho que hacer, se distraerían en funciones ajenas a las que les corresponden.

**Sr. Bravo.** — La experiencia no debe ser muy mala porque de los 140 o 150 registros de la capital, la totalidad está cubierta por escribanos que tienen su título expedido por la cámara.

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — No obstante eso, no me negará que representaría para las cámaras de apelaciones una pérdida de tiempo considerable, que las obligaría a postergar los asun-



tos que están llamadas a resolver y que son numerosos.

**Sr. Ferrarotti.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — La había solicitado el señor miembro informante; después se la concederé al señor diputado.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Las observaciones emitidas por el señor diputado por la capital doctor Melo y por el señor diputado doctor Bravo, se refieren a dos cosas importantes que afectan un artículo que es fundamental en el proyecto, una de las cuales es la que se refiere al depósito en efectivo.

La comisión, como ya lo he dicho, ha estudiado detenidamente artículo por artículo. Ninguno de los proyectos presentados, ni ningún código de procedimientos exige el depósito en efectivo, salvo el que rige en la provincia de Santiago del Estero. Los proyectos presentados a esta honorable cámara por los señores diputados Escobar, Avellaneda, Rolón, etcétera, sólo exigen la fianza. La comisión ha pensado que con este depósito se establece una responsabilidad efectiva, rápida y segura y que no es sustituible por la fianza personal ni la caución real, ni por la hipoteca porque estos tres últimos recursos exigen tramitaciones y procedimientos curialescos, dilatorios, que desvirtúan la naturaleza de la responsabilidad que requiere esta ley y que debe establecerse si se quiere garantizar de un modo eficiente los intereses que se ventilan en la justicia.

Yo he recibido en mi casa la visita de tres procuradores representantes de un núcleo de ellos, que fueron a hacerme una petición, proponiendo una especie de transacción, que les fué negada en absoluto; y cambiando ideas sobre este depósito con esos señores, ellos mismos reconocieron la necesidad indispensable de establecerlo en razón de que la fianza está sujeta a procedimientos dilatorios, dos procedimientos, como los exigen la caución real y la hipoteca: el ofrecimiento, la constitución de la fianza es un trámite aparte de que todos los jueces, al menos en la república, son complacientes en aceptar a los procuradores las fian-

zas de los abogados bajo cuya dirección tramitan los asuntos, u otra persona de solvencia más o menos conocida y sobre cuya responsabilidad los jueces no se encargan de averiguar mayormente. Luego viene el caso de hacer efectivas las costas causídicas y las multas impuestas al procurador, y la realización de la fianza da lugar a un procedimiento, o más bien dicho, a un juicio dilatorio lleno de incidencias aparte de la dificultad de hacer efectiva la fianza entre los abogados por las consideraciones recíprocas que se guardan entre sí.

El señor diputado doctor Moreno, que ha introducido este artículo aceptado por la comisión, debió tener sus fundamentos, basado en la experiencia de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires con respecto a la fianza. Y el señor diputado, basado seguramente en esta experiencia...

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — Si me lo permite el señor diputado voy a darle un antecedente importantísimo. La primera ley de procuración que se sancionó en la provincia de Buenos Aires no exigía fianza a los procuradores, y el poder ejecutivo la vetó por considerarla ineficaz, a causa de esa omisión. Hubo entonces necesidad de presentar nuevos proyectos a consecuencia de los cuales se sancionó la ley actual que exige la fianza en la forma propuesta por la comisión.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Más que todo, señor presidente, traigo la opinión del gremio, de los profesionales, que manifiestan que esta es una reforma conveniente.

**Sr. Maidana.** — Y sin esas opiniones estamos perfectamente convencidos de que es eso lo que conviene.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Por eso la comisión no puede aceptar substitución ni por la caución real ni por la hipoteca; porque la realización de la hipoteca se presta a un juicio.

Lo que se debe desear es una ley clara, expedita, segura, que dé tranquilidad y confianza a los que depositan sus intereses y derechos en manos de los procuradores.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.



Creí que mi proposición era sencilla, por eso no la he fundado pensando que la iban a aceptar los miembros de la comisión: tan clara me parecía.

Voy pues a decir una palabra después de escuchar la interesante del señor diputado por Santiago del Estero.

**Sr. Avellaneda (M. A.)** — ¿Si me permite el señor diputado?

Deseo hacer una indicación de orden en el sentido de no perturbar la discusión y de facilitar que se vote cuanto antes este artículo 3°. Pido que se discuta y apruebe inciso por inciso o cláusula por cláusula, para no discutir desde ahora las últimas cláusulas.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Como se ha hecho indicación al principio de que todo artículo que no sea observado se dé por aprobado, la presidencia iba a dar por aprobados los tres primeros incisos del artículo 3.º y además las letras a) y b) del inciso 3.º

**Sr. Ferrarotti**—Mi observación precisamente era a la letra a) del inciso 3.º

**Sr. Avellaneda (M. A.)** — Podríamos dar por aprobados los tres primeros incisos.

**Sr. Ferrarotti.** — Mi proposición es la siguiente: que la comisión aceptara que después de las palabras “universidades argentinas” se intercalara el término “provinciales” y se dijera: “El título de doctor en jurisprudencia emanado de universidades provinciales”, porque no existen otras universidades; salvo que el pensamiento de la comisión haya sido otro.

**Sr. Avellaneda (M. A.)** — Existe la universidad católica.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Hay universidades en la capital que no son nacionalizadas.

**Sr. Ferrarotti.** — Mi deseo es que se aclare, para saber si está en su pensamiento que son puramente las universidades provinciales las que deben ser comprendidas en este artículo.

**Sr. González.** — La comisión mantiene su despacho.

**Sr. Moreno (R.)** — Pido la palabra. La observación del señor diputado por Santa Fe es bastante fundamental, y si no la hubiera hecho él, la habría

recogido yo, porque siento la misma duda ante el despacho de la comisión.

Si se dice simplemente que basta el título de doctor en jurisprudencia emanado de universidades argentinas no nacionalizadas se podrá fundar mañana cualquier universidad, como hay en otros países, que expiden títulos de doctor a quienes lo pagan o a quienes quieren recogerlo sin mayores dificultades, y tendríamos a esos señores habilitados para ejercer la profesión de procurador; sería fácil así hacerse procurador pagando a una universidad cualquiera, como sucede en otros países, según deben saberlo los señores diputados.

De manera que encuentro perfectamente acertado lo que ha propuesto el señor diputado por Santa Fe de que se intercale la palabra “provinciales”. Si se quiere hacer una excepción especial con la universidad católica, que se haga especialmente diciéndolo, pero no lleguemos, sancionando una disposición que parece inofensiva, a hacer prevalecer una sanción que favoreciendo los títulos de la universidad católica pueda amparar otros títulos de universidades que no tengan ninguna clase de responsabilidad.

—Solicitan la palabra los señores diputados Bravo y González.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Tiene la palabra el señor diputado miembro informante de la comisión. Después le concederé la palabra al señor diputado Bravo.

**Sr. González.** — El agregado propuesto por el señor diputado por Santa Fe no modificaría la situación que desea hacer desaparecer de los términos del despacho de la comisión, porque si quisiera comprender exclusivamente a las universidades provinciales argentinas, existiría siempre el peligro insinuado por el señor diputado por la provincia de Buenos Aires, doctor Moreno, de que podría obtenerse con facilidad el título de doctor en esas universidades.

**Sr. Ferrarotti.** — ¡Si no existen más que la de Tucumán y la de Santa Fe!



**Sr. González.** — Yo no creo que pueda existir el peligro...

**Sr. Moreno (R.)** — Yo no puedo concebir que una provincia vaya a crear universidades que sean una farsa.

**Sr. González.** — Y yo tampoco creo que en la capital federal pueda ocurrir semejante cosa.

**Sr. Moreno (R.)** — Se puede hacer en la capital federal y en cualquier parte. Siempre hay negociantes para eso.

**Sr. González.** — Quiere decir que el señor diputado está en contra de la proposición del señor diputado por Santa Fe...

**Sr. Moreno (R.)** — No, señor.

**Sr. González.** — ... pero el señor diputado propone el agregado de la palabra "provinciales".

**Sr. Melo.** — Universidades oficiales de las provincias.

**Sr. Moreno (R.)** — Universidades creadas por las provincias, a semejanza de las de Santa Fe y Tucumán. Si mañana la provincia de Santa Fe o la de Jujuy crearan una universidad, estarían comprendidas en este precepto, pero no la que creara un grupo de particulares en la provincia o en la capital.

**Sr. Maidana.** — Con agregar la palabra "oficiales" hemos salvado el inconveniente.

**Sr. Moreno (R.)** — La palabra es lo de menos; la cuestión es el concepto.

**Sr. Maidana.** — No es lo de menos la de menos; la cuestión es el concepto.

**Sr. González.** — Yo no creo que pueda existir el peligro de que se creen especialmente universidades para otorgar el título de doctor en jurisprudencia o de procurador; y en todo caso, si esto pudiera ocurrir en el transcurso del tiempo, actualmente parece que hay poca probabilidad, la comisión no tendría inconveniente en aceptar el agregado propuesto por el señor diputado por Córdoba, es decir, que se diga "oficiales", para que no se creen institutos particulares destinados exclusivamente a otorgar esos títulos.

Con ese agregado quedaría perfectamente aclarado el sentido.

**Sr. Maidana.** — Yo desaría que el

señor diputado por Santa Fe propusiera el agregado en forma de que quede completo el concepto.

**Sr. Ferrarotti.** — Yo acepto el agregado del señor diputado Maidana, porque responde a mi pensamiento: provinciales oficiales.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Aceptado por la comisión el agregado del señor diputado por Córdoba, forma parte del despacho.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

Quiere decir, señor presidente que la comisión acepta eliminar del inciso a) las palabras "argentinas o nacionalizadas".

**Sr. González.** — Se podrían suprimir las palabras "no nacionalizadas".

**Sr. Bravo.** — La comisión acepta en sustitución de esas palabras las siguientes: "oficiales de las provincias"; de manera que el párrafo quedaría así: "El título de doctor en jurisprudencia, emanado de universidades oficiales de las provincias".

**Sr. González.** — No hay inconveniente.

**Sr. Bravo.** — No tengo ninguna observación que hacer.

**Sr. Moreno (R.)** — Eso expresa bien el pensamiento.

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — Son las únicas universidades que pueden dar título.

**Sr. Maidana.** — ¿De manera que el inciso a) ha quedado en la siguiente forma: "el título de doctor en jurisprudencia emanado de universidades argentinas oficializadas", en vez de "no nacionalizadas"?

**Sr. Presidente** (Goyeneche) — No, señor diputado; la secretaría va a leer cómo ha sido aceptado por la comisión.

**Sr. González.** — En esa forma aceptó la comisión.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — La comisión aceptó en la forma que va a leer la secretaría.

**Sr. Secretario** (Zambrano) — La comisión acepta el sub-inciso a) del inciso 3.º en esta forma: "El título de doctor en jurisprudencia, emanado de universidades oficiales de las provincias".



**Sr. Avellaneda (M. A.).** — ¿La universidad católica queda fuera?

**Sr. Maidana.** — Sí, señor diputado, porque no es oficial.

—Después de unos momentos de espera para conseguir quórum.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Como se requiere con frecuencia el voto de los señores diputados, la presidencia les ruega no se ausenten del recinto.

Estaba en consideración el sub-inciso a) del inciso 3.º, con la modificación aceptada por la comisión.

No habiendo oposición, se da por aprobada.

—Sin observación se da por aprobado el subinciso b) del inciso 3o.

**Sr. Presidente (Goyeneche)** — Corresponde considerar un nuevo subinciso al mismo inciso 3.º, propuesto por el señor diputado Bravo, que se va a leer.

**Sr. Secretario (Zambrano).** — La proposición del señor diputado es la siguiente: “c) a falta de título, la competencia podrá ser acreditada por un examen rendido ante la excelentísima cámara en lo civil de la capital federal, según el programa que la misma exija, durante tres años, a contar desde la vigencia de esta ley”.

**Sr. González.** — Pido la palabra.

La comisión no acepta el agregado propuesto por el señor diputado por la capital, y mantiene íntegramente su despacho.

Sería crear una situación desigual a los procuradores de las provincias con relación a los de la capital, si éstos pudieran ejercer la profesión, rindiendo tan solo un examen de competencia ante la excelentísima cámara de apelaciones.

Por otra parte eso destruiría los propios fundamentos del despacho de la comisión. Esta requiere esencialmente para el ejercicio de la procuración el título universitario y los otros requisitos subsidiarios que el mismo despacho prevé.

Es así cómo la comisión mantiene su despacho.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

No voy a insistir demasiado en esta cuestión. Es un asunto que no va a revolucionar la justicia argentina, ni va a modificar las causas de los graves males que aquejan a la misma, y me extraña que el señor miembro informante de la comisión no acceda a la incorporación de este nuevo subinciso que no va a influir en modo alguno en los fundamentos del despacho.

Yo acepto los fundamentos del despacho, porque creo que son razonables y justos; pero una disposición de carácter transitorio como ésta, que tiende a suplir la imposibilidad en que se encontrarán muchos hombres para cursar las universidades o para trasladarse a las provincias que las tienen, a fin de obtener título de procurador, me parece que la comisión la podría aceptar como una medida transitoria. Por eso le doy una duración limitada a tres años.

Por otra parte, no creo que la comisión pueda poner en duda el interés que tendrá la cámara en lo civil de la capital en los programas que formulará, de manera que las personas que se presenten a rendir examen de acuerdo con ellos, puedan acreditar la competencia que el mismo tribunal crea necesaria para los que ejercen la procuración. Durante años, la cámara de apelaciones ha tomado examen para escribanos, por lo cual no veo la causa de que durante tres años más se pueda permitir a los hombres que no se encuentren en condiciones de cursar universidades, de rendirlo, obteniendo así el certificado correspondiente para poder ejercer la procuración.

**Sr. Maidana.** — Pido la palabra.

Voy a votar en contra del agregado propuesto por el señor diputado Bravo por las razones que ha expresado el señor miembro informante de la comisión y además por otra consideración que creo fundamental, y es la siguiente: yo creo que, a los jueces como a los tribunales todos del país, no deben dárseles atribuciones que vengán a distraerles su tiempo, cuando no tengan



relación directa con los pleitos motivo de las decisiones de ellos.

Por esta razón, señor presidente, yo he criticado toda mi vida que los magistrados, ya sean de tribunales de primera instancia o de segunda, ocupen puestos en la cátedra universitaria o en los colegios nacionales, porque todo el mundo sabe que, en nuestro país, hay un clamor contra la justicia tardía; y efectivamente es muy tardía la justicia en nuestro país, y nosotros no solamente les debemos prohibir a los jueces que ejerzan ninguna otra función que no tenga atinencia con esta cuestión directamente relacionada con la justicia, que es fallar los asuntos a su consideración, sino que no debemos aumentarles este otro nuevo cargo de instituirlos en tribunales para otorgar títulos o diplomas de suficiencia, porque eso es aumentar el pesado trabajo que tienen en perjuicio del despacho rápido que exigen las causas en litigio, sometidas a su resolución.

Además sería también una injusticia colocar a los procuradores de las provincias en desventajas respecto de los procuradores de la capital, obligándolos a realizar — por ejemplo, a un pobre procurador de La Rioja que no tiene con qué venir a la capital — un viaje para rendir examen; sería colocarlos en una situación completamente desventajosa, si se aceptara la proposición del señor diputado.

**Sr. Avellaneda (M. A.)** — Además el examen ante las cámaras podría acreditar, indudablemente, idoneidad y competencia, pero no podría nunca asegurar la moralidad, tan necesaria para el ejercicio de la procuración.

**Sr. Bravo.** — Tampoco asegura la moralidad el estudio en la facultad. El señor diputado debe saber que el foro de la capital está lleno de abogados sin escrúpulos, a quienes la ley les da facilidades para que ejerzan la procuración, sin exigirles fianza ni garantías de otra naturaleza.

**Sr. Fernández.** — No me explico que no se les exija a los abogados las mismas seguridades que deben exigirse a otros.

**Sr. González.** — Eso debe tratarse oportunamente.

**Sr. Escobar.** — Para eso se ha propuesto la creación del colegio de abogados, que debe regir todas estas cuestiones.

**Sr. Bravo.** — El colegio de abogados viene a ser una especie de tribunal de honor.

**Sr. Escobar.** — Si me permite la presidencia...

La facultad de Derecho de Buenos Aires exige un examen; y en la ordenanza que aprobó el programa de estudios de la universidad, se estableció después de un largo debate, que todos aquellos que presenten un certificado de estudios secundarios, podrán ingresar a la facultad para hacer los estudios de la procuración, y los que no tengan certificado deberán dar un examen de ingreso. De manera entonces, que es facilísimo que los que no hayan cursado estudios secundarios tengan acceso a la facultad con el simple examen de ingreso.

**Sr. Presidente.** (Goyeneche). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por la capital.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — En consideración el inciso 4.º, que ha sido observado por el señor diputado por Buenos Aires y por el señor diputado por la capital, doctor Melo.

**Sr. Vergara.** — Pido la palabra.

Voy a oponerme al agregado que ha proyectado el señor diputado doctor Bravo. Entiendo que sustituir la fianza tal cual está establecida en el proyecto de ley sería desvirtuarla quizá en sus fundamentos...

**Sr. Bravo.** — No pretendo eso, señor diputado.

**Sr. González.** — Es el doctor Melo el que lo proponía.

**Sr. Bravo.** — Lo que yo he propuesto es otra cosa menos grave que eso. He propuesto lo siguiente: que durante el primer año de vigencia de la ley, la fianza en dinero o en títulos, pueda ser sustituida por el depósito de un título de propiedad.

**Sr. Vergara.** — Me iba a referir a eso. Los perjuicios que la ley



trata de evitar en el ejercicio de la procuración, lo mismo podrá cometerse dentro del año a que se refiere la indicación del señor diputado Bravo o con posterioridad. Por eso me opongo terminantemente a que venga a desvirtuarse la naturaleza de la fianza, por cuanto importaría desvirtuar en uno de sus elementos básicos la reglamentación de esta ley. Lo que se desea es, que el procurador sea una persona de responsabilidad material en primer término, y en segundo lugar, que en cualquier momento pueda hacerse efectiva la responsabilidad en que llega a incurrir.

Con un título de propiedad no se consigue esta segunda finalidad, porque cuando llegue el momento de hacer efectiva la fianza es siempre difícil y moroso hacerlo sobre una propiedad.

Lo que se desea, si llega ese supuesto, es que el dinero se encuentre depositado, tal como se establece en otros códigos que reglamentan la procuración, para que el damnificado pueda hacer efectiva la responsabilidad en que ha incurrido. Además, señor presidente, podría prestarse esta forma de substitución a desvirtuar la ley.

Puede, perfectamente bien, señor presidente, modificarse el precio real de las cosas y llegado el caso, por más que figure cinco mil pesos en el título de propiedad, el resultado de la ejecución no arroje esa suma. Entonces preguntaría al señor diputado Bravo si no está desvirtuado el propósito de la ley, que es que en todo momento esté disponible la referida cantidad.

**Sr. Bravo.**—Después del primer año esta fianza caduca.

**Sr. Vergara.**—De ahí que yo no veo la razón por la cual no se va a exigir al procurador el depósito real. Más: yo creo que un procurador, por representar intereses valiosos debe disponer de cinco mil pesos para depositar en garantía de la honestidad del ejercicio de su función. Creo que el procurador que no esté en esas condiciones, no ofrece garantías para representar intereses de terceros.

Lo que propone el señor diputado

Bravo, de dar facilidades a los procuradores durante un año, no lo encuentro razonable. Si el señor diputado exige dinero después de un año ¿por qué no lo exige durante el mismo? En esto no puede haber dualidad de criterio. Una cosa u otra.

**Sr. González.**— Pido la palabra.

La comisión insiste en los términos de su despacho; y en contestación a lo que propone el señor diputado Bravo tendría que reproducir los argumentos conceptuosamente expuestos por el señor diputado por la provincia de Buenos Aires y agregar esta otra consideración: la responsabilidad del procurador debe hacerse efectiva en los juicios, según este despacho, rápidamente, y es por eso que se ha establecido el depósito en efectivo. Si pudiera substituirse el depósito con títulos de propiedad sería menester seguir los trámites ejecutivos con todas las incidencias que pudieran producirse, y sería desvirtuar el propósito fundamental que ha tenido en vista la comisión, es decir, asegurar, hacer efectiva la responsabilidad de los procuradores de una manera rápida, inmediata, de modo que las partes afectadas puedan recurrir sin inconvenientes al depósito en efectivo para hacerse pago de las sumas que les correspondan como consecuencia de esa responsabilidad.

De manera que la comisión insiste en los términos de su despacho, lamentando no poder aceptar el agregado propuesto por el señor diputado por la capital.

**Sr. Gibert.**— Pido la palabra.

Opino en la misma forma que el señor diputado en cuanto a que el agregado propuesto por el señor diputado Bravo es inaceptable, pero disiento en cuanto a su oposición a la proposición hecha por el señor diputado Melo, que reputo muy justa, y que dentro de ese concepto puede encuadrarse perfectamente el propósito de la comisión, de que la fianza sea de rápida ejecución.

El depósito de un título limita la responsabilidad al título mismo y trae los inconvenientes de la ejecución de



la propiedad. Además, si ésta no responde a la garantía, no hay otra responsabilidad mayor, porque se aceptó ese título.

**Sr. Becú.** — Permítame, señor diputado.

El depósito de un título no significa garantía de ninguna clase; el título es un papel, no trae consigo ningún vínculo jurídico entre la obligación garantizada y la garantía. Si es una garantía real, tiene que constituirse la hipoteca.

**Sr. Melo.** — Eso es lo propuesto.

**Sr. Gibert.** — Precisamente yo estoy objetando esa proposición, y el argumento traído por el señor diputado es un fundamento más que agregar a los que he expuesto.

En cuanto a la sustitución de la garantía real por una garantía personal, la considero perfectamente viable y justa.

Creo que la cámara me acompañará en el concepto de que entre los procuradores que han ejercido durante muchos años la profesión y que por esta ley podrán continuar su ejercicio, hay un gran número que no se encuentran en condiciones de depositar los cinco mil pesos en efectivo. Precisamente la pobreza del procurador demuestra, a mi juicio, su honestidad, y entonces no es posible que la ley prohíba continuar en el ejercicio de su profesión a ciudadanos honestísimos, que la han ejercido durante tantos años y que por haber sido muy honrados no tienen hoy cinco mil pesos en efectivo, pero a quienes no les falta una garantía personal suficiente que responda en cualquier emergencia al llamado judicial. Y si se cree que esa garantía no puede hacerse efectiva inmediatamente, podría evitarse el inconveniente agregando una sanción, como es la de que se deberá responder dentro de veinticuatro horas al primer llamado judicial, bajo sanción de cancelación de la inscripción del procurador. En esta forma, el garante y el procurador tratarán de responder inmediatamente, ante el peligro de que éste pierda el ejercicio de su profesión para siempre. Así dejamos abierta la

puerta a estos profesionales honestos, haciéndoles justicia.

**Sr. Maidana.** — Entiendo que el señor diputado propone también que se acepte la fianza personal. A mi juicio eso es destruir las bases fundamentales del proyecto de la comisión y presenta el gravísimo inconveniente de que estas fianzas personales pueden ser muy solventes hoy y no serlo mañana, por motivo de quiebra, insolvencia o cualquiera otra causal inesperada en la vida de los negocios donde se conquistan o se pierden de un día para otro los más cuantiosos patrimonios.

**Sr. Vergara.** — Hay más aún: la aceptación de esa proposición implicaría desvirtuar la ley.

**Sr. Maidana.** — La persona que va a servir de fiador al procurador podría muy bien prestarle o regalarle los cinco mil pesos. (*Risas*). Además tenemos, todos los demás inconvenientes que ya se señalaron respecto del agregado propuesto por el señor diputado Melo.

**Sr. Melo.** — Y que voy a fundar oportunamente pues hasta ahora me ha sido imposible.

**Sr. Maidana.** — Por ese agregado que propone el señor diputado Melo los procuradores pueden afianzar su responsabilidad dando una escritura hipotecaria en primer término. Eso sí que es garantía real. Pero la personal no es garantía ninguna, sobre todo si se tiene en cuenta que cuando se vaya a hacer efectiva la responsabilidad de las costas, habrá que ejecutar la fianza, habrá que inhibirla y después sacarla a remate sus bienes, todo lo cual significa entablar un segundo pleito después de terminado el primero.

**Sr. Gibert.** — El señor diputado está intercalando un discurso dentro de una exposición.

**Sr. Maidana.** — El objeto que la comisión persigue es que la responsabilidad del procurador sea real, efectiva e inmediata.

**Sr. Gibert.** — La responsabilidad es efectiva en la forma propuesta, teniendo en cuenta la sanción que la misma ley establece y que importaría la pérdida de la profesión para el procurador...



**Sr. Maidana.** — No es ese el pensamiento primordial del proyecto que se discute.

**Sr. Gibert.** — La sanción que establece la ley es una garantía más que suficiente, porque no se concibe que un hombre pierda el derecho de ejercer la profesión de que vive, por no responder a un mandato del juez. Esto me parece que es evidente, y al mismo tiempo que se establecen las garantías necesarias, se hace un acto de justicia respecto de muchos honestos procuradores.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

En primer lugar pido que se lea el agregado que he propuesto:

—Se lee:

...“o una primera hipoteca por la misma suma o dar fianza de persona de responsabilidad comprobada y por esa cantidad; fianza que se renovará cada dos años.”

**Sr. Melo.** — Noto, señor presidente, en los miembros de la comisión, que con un pensamiento honrado de reforma, llevan a un extremo tal la expresión de ese pensamiento en este caso que resulta de ella una exclusión injusta y un privilegio odioso, y me permitirán los señores diputados traer aquí un recuerdo.

Creo que en Plutarco — en la vida de Escipión el Africano — he leído que un día encontrándose Escipión con varios amigos en su villa cerca de Roma empezó a ladrar furiosamente el perro de la casa, y como los amigos se alarmaran, les dijo Escipión el Grande para tranquilizarlos: “No se alarmen, debe ser un pobre que pasa”. El pobre ha sido considerado muchas veces en pueblos que se creían muy cultos y que adoraban el dinero “como un infame”. Un escritor inglés dice que todo pobre es un infame.

La exageración del pensamiento honrado de la comisión la lleva casi a ese mismo extremo. El procurador que habiendo ejercido durante muchos años con competencia y con honestidad su profesión y que por sus cargas de familia no haya podido reunir fondos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, quedaría por la exigencia del

depósito en dinero o en títulos de crédito completamente excluido del ejercicio de la procuración.

El pensamiento de la comisión se cumple cuando se da una garantía verdadera y seria, un valor representativo de una cantidad igual a la que se exige en dinero efectivo o en títulos por la comisión. Esta, dada la forma en que el inciso ha sido redactado, excluye al pobre, da privilegio al rico, y producirá la consecuencia de entregar a unos cuantos ricos el ejercicio, el monopolio de la procuración, lo que es contrario a la esencia de nuestra democracia.

Una hipoteca de un bien inmueble, una primera hipoteca, señores diputados, garante tanto como el dinero, garante tanto como los títulos. ¿Y para qué están los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, como los fiscales, sino para hacer efectivo el pago?

**Sr. Maidana.** — La hipoteca que ese procurador le quiera hacer al tribunal, hágasela a un particular, y deposite el dinero. ¿Para qué el señor diputado va a vincular al particular con la cámara?

**Sr. Gibert.** — Porque tiene que pagar intereses; y los depósitos judiciales no pagan intereses.

**Sr. Maidana.** — Nadie le va a prestar dinero sin interés, en un país como éste, donde hay tantos usureros.

**Sr. Melo.** — Por lo mismo. ¿Por qué se le va a obligar a que pague intereses, y se exponga a que cuando venza la hipoteca, no encontrare a tiempo un prestador y sea víctima de una ejecución?

**Sr. Maidana.** — ¿Por qué razón, — en último término, para desvirtuar su argumentación — para ejercer la medicina o la farmacia se exige un título?

**Sr. Melo.** — ¡Pero eso es otra cosa!

**Sr. Maidana.** — ¡Para garantizar el orden público, señor! ¿Cree el señor diputado que los intereses que manejan los procuradores no son tan grandes como para poder comprometer la situación pecuniaria de muchas personas, que tienen necesidad de recurrir a ellos?



**Sr. Melo.** — ¿Cree el señor diputado que es condición *sine qua non*, ser rico para ser buen procurador?

**Sr. Maidana.** — No soy partidario de los ricos: soy amigo de los pobres. Pero el pobre puede muy bien estudiar para obtener el título que lo habilite para desempeñar la procuración.

**Sr. Melo.** — Por eso exige la ley ciertas condiciones de idoneidad. Pero además de la idoneidad, exige el depósito de una cantidad en dinero o en títulos de crédito. Estoy de acuerdo en que la ley debe exigir idoneidad y respecto de la garantía estoy de acuerdo también; pero no limitándola al dinero o a los títulos, sino extendiéndola al derecho real de la hipoteca y a la fianza de persona de responsabilidad comprobada.

**Sr. Maidana.** — La garantía pecuniaria se exige para responder de la lealtad en los intereses que maneja, porque muy bien puede ser idóneo, y al mismo tiempo un bandido.

**Sr. Melo.** — Pero la hipoteca asegura la responsabilidad.

Voy a continuar con mi exposición.

La idoneidad, señor presidente, está exigida por la ley. Eso es aparte. Estamos en la responsabilidad pecuniaria, que no es la responsabilidad moral, pues un hombre puede ser rico y al mismo tiempo puede ser un hombre sin moralidad ninguna. Los españoles dicen: "Nunca el Duero creció con agua clara". (*Prolongados aplausos en las galerías*). Y es verdad. Las grandes fortunas son hijas del trabajo colectivo, no del individual y, por lo tanto, son en general producto de una usurpación (*¡Muy bien!*)

Los señores diputados van a crear plutoeracia de procuradores, y van a dejar a los pobres idóneos y honrados sin poder continuar en el ejercicio de la procuración que ha sido su único medio de vida. Es una gran injusticia, contra la cual se subleva mi espíritu.

**Sr. Videla.** — Eso pasa con muchas funciones públicas.

**Sr. Melo.** — Propongo la fianza personal, la fianza de una persona de responsabilidad comprobada, comprobada, noten los señores diputados. Se tra-

ta de una comprobación hecha ante el presidente de la suprema corte en la capital federal, o en la justicia federal de las provincias y territorios nacionales ante el presidente de la cámara de apelaciones o los jueces letrados...

**Sr. Maidana.** — ¿Qué es lo que quiere asegurar el señor diputado con la fianza personal?

**Sr. Melo.** — La responsabilidad.

**Sr. Maidana.** — Muy bien. Pero suponga que yo fuera procurador y presentara la fianza personal del doctor Melo. Hoy es solvente; mañana hace un negocio arriesgado y queda sin un centavo. (*Risas*).

**Sr. Melo.** — He propuesto que la fianza se renueve cada dos años.

**Sr. Maidana.** — Pero hoy es solvente, y mañana puede ser insolvente.

**Sr. Vergara.** — ¿Y si no encuentra la fianza para la renovación, y tiene responsabilidades contraídas?

**Sr. Melo.** — ¿Cómo "no encuentra la fianza"? Si no la encuentra, no puede ejercer la procuración.

**Sr. Vergara.** — El señor diputado sabe que es común en el comercio que hoy se tenga una fianza, y mañana ya no se tenga.

**Sr. Melo.** — Si no encuentra fianza no puede ejercer la procuración.

**Sr. Vergara.** — ¿Y si ya tiene alguna responsabilidad comprometida en los juicios tramitados?

**Sr. Melo.** — Lo mismo es con el dinero.

**Sr. Vergara.** — No, señor diputado; el dinero está depositado.

**Sr. Melo.** — Pero es lo mismo; porque siempre es ante los mismos jueces. Son los mismos jueces, que van a recibir el dinero, los que van a recibir la comprobación de la fianza. Y para evitar cualquier complacencia y dar mayor seguridad y evitar toda observación propongo que se agregue que "no puede ser el fiador un abogado de la matrícula".

**Sr. González.** — Si me permite una observación el señor diputado...

Esa caución personal quedaría librada a la buena o mala voluntad del juez, que tendría que apreciar la res-



ponsabilidad pecuniaria del fiador, y dejaremos una base inestable para la determinación de la responsabilidad de los procuradores en los juicios. Lo que desea la comisión es establecer una base cierta para la responsabilidad del procurador.

**Sr. Melo.** — La responsabilidad que propongo es la misma que exige el Banco de la Nación a sus empleados.

**Sr. González.** — Habría que obligar a los jueces a que procedieran a una investigación para determinar el grado de responsabilidad de los fiadores. Es una grave responsabilidad que dependería siempre de la buena o mala voluntad de la apreciación equívoca de los jueces, y no se aseguraría la responsabilidad de una manera definitiva y rápida como lo es el depósito efectivo a la orden del juez.

**Sr. Melo.** — Es sorprendente que un hombre de tanta penetración como el señor diputado por Corrientes se exprese así.

Si la vida, el honor, si todo lo que vale para nosotros están librados a la resolución de los jueces ¿cómo puede decir el señor diputado que es peligroso dejar a la misma estimación la comprobación de la responsabilidad para aceptar las fianzas!

**Sr. González.** — Pero es muy distinto determinar la responsabilidad pecuniaria de las personas, que puede variar en el vaivén de la vida ordinaria.

**Sr. Maidana.** — Varía todos los días.

**Sr. González.** — Sería obligar a que el juez investigara diariamente el grado de responsabilidad del fiador.

**Sr. Melo.** — El Banco de la Nación no exige a sus empleados sino una fianza personal.

**Sr. Vergara.** — Por noventa días.

**Sr. Melo.** — No, señor diputado.

**Sr. Vergara.** — Sí, señor diputado: por noventa días.

**Sr. Ferrarotti.** — ¿Y los pagadores y receptores de rentas y todas las personas que pagan millones y millones?

**Sr. González.** — Tendría que atenerme a este antecedente legislativo: a la ley de la provincia de Buenos Aires, que establece de una manera terminante en su artículo 4.º la condición

de la caución, de depósito en efectivo en el Banco de la Provincia...

**Sr. Melo.** — Un error no puede dar lugar a otro error.

**Sr. González.** — ... y que no autoriza a sustituir esa fianza en la forma propuesta.

**Sr. Ferrarotti.** — En la provincia de Santa Fe únicamente hay fianzas personales por seis mil pesos, y puedo asegurar que si hay procuradores honestos en todas partes, también son muy honestos en Santa Fe.

**Sr. Vergara.** — También los hay honestos donde no hay reglamentación. ¡Entonces dejémonos de leyes!

El señor diputado Melo habla de los empleados de banco. ¿Cómo se va a exigir a esos empleados una fianza material, un depósito real? ¡Eso es tergiversar las cosas!

Aquí se trata de un procurador, de alguien que debe tener una función social de la trascendencia de que nos hablaba el miembro informante de la comisión. ¿Cómo lo vamos a equiparar a un empleado de banco!

**Sr. Melo.** — El empleado de banco que maneja fondos tiene mayor responsabilidad quizás que el procurador.

**Sr. Maidana.** — Pero tiene su jefe que lo vigila y el procurador no tiene control. Es una profesión lucrativa.

**Sr. Melo.** — También es lucrativa la del empleado de banco, porque le pagan.

**Sr. Vergara.** — El procurador tiene una función extraordinaria. Es representante de intereses valiosísimos de terceros, y ante la sociedad no puede concebirse que un funcionario de esa naturaleza no tenga responsabilidad hasta cinco mil pesos. Si no la tiene, que no ejerza. Podrá haber alguna excepción, podrá algún señor muy honesto y meritorio no tener cinco mil pesos. Andamos por el mundo y todos vemos y palpamos esas cosas. Pero el señor diputado ha de estar conmigo en que, si abrimos las puertas en esta forma, toda la reglamentación y todo el castillo de la ley se viene al suelo, y entonces lo más posible es que reine el abuso y la incorrección.

El señor diputado Melo hablaba de



las hipotecas. Parece que le choea al señor diputado la proposición del señor diputado Bravo, de que se depositen títulos, porque no es garantía. No estoy de acuerdo. Es cierto que cuando se establecen relaciones entre particulares, el hecho de que uno reciba un título sin constituir una hipoteca o un derecho real, no tiene ningún privilegio. Aquí no debe olvidar el señor diputado que se trata de una ley que tiene tanta importancia jurídica como puede tenerla la misma hipoteca, legislada por el código civil; y si esta ley dice que el título es entregado y depositado en el registro respectivo o en la corte, a los efectos de asegurar la responsabilidad del procurador, constituye una verdadera prenda que está legislada por una ley.

De manera que, entonces, ya hay un privilegio sobre ese título, por lo que no es necesario la constitución de la hipoteca, con la cual cree el señor diputado reforzar la argumentación anterior del señor diputado Bravo.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Es un error jurídico. Yo no había querido insistir en esto por la estimación que me merece el señor diputado Bravo...

**Sr. Bravo.** — ¡Muchas gracias!

**Sr. Melo.** — ...por sus cualidades espirituales y por su ilustración; pero me veo obligado, ya que el señor diputado trae otra vez esta cuestión y me reprocha un argumento que ha sido hecho por el señor diputado Becú, y con el que estoy de acuerdo, a decirle cuáles son las razones jurídicas que tengo para sostener esa tesis. Los señores diputados van a estar conmigo.

La prenda que se puede constituir, sino sobre "cosas muebles" que se entregan al acreedor.

**Sr. Vergara.** — ¿No se constituye también prenda sobre un pagaré hipotecario?

**Sr. Melo.** — Es completamente diferente. Se endosa.

**Sr. Vergara.** — No he oído.

**Sr. Melo.** — Es completamente diferente.

**Sr. Vergara.** — Conozco resoluciones judiciales, de los más altos tribu-

nales, en ese sentido, estableciéndose que se puede constituir prenda sobre el pagaré hipotecario, y los bancos han alegado privilegios sobre ellos.

**Sr. Melo.** — Me va a obligar el señor diputado a citar el código civil.

La prenda no puede ser constituida sino sobre cosas muebles; y una escritura de propiedad no es ni una cosa, ni es tampoco un mueble, para nuestro código civil.

**Sr. Vergara.** — Es un inmueble por representación.

**Sr. Bravo.** — El señor diputado sabe que la ley orgánica...

**Sr. Melo.** — No es una "cosa mueble", sino un "bien inmueble".

**Sr. Avellaneda (M. A.)** — Los títulos de renta, en que acaso puede estar comprometida toda la deuda pública de una nación ¿son cosas muebles o inmuebles?

**Sr. Melo.** — Si el señor diputado quiere que entremos a tratar otra cuestión extraña a este debate estoy dispuesto a ello pero en otro momento; no perturbemos ahora esta discusión, que se refiere a la garantía que representa la simple entrega de un título de propiedad de un inmueble, por su propietario, a otro, para que lo tenga en caución.

El caso es bien claro y basta volver los ojos al código civil.

En cuanto a la garantía que la fianza significa, diré que en estos momentos es muy difícil que una persona de responsabilidad probada la dé a un hombre que no sea moralmente excelente, y si la da peor para él porque tendrá que responder.

Lo que yo quiero es que no queden excluidos los procuradores honestos, que por el despacho de la comisión vendrían a quedar excluidos por los procuradores ricos. Es la más grande injusticia que puede cometer el congreso de la nación. (*¡Muy bien!*)

**Sr. Vergara.** — Pero es abrir la puerta a las irregularidades.

**Sr. Melo.** — No se abre la puerta a ninguna irregularidad, sino que se evita así que unos cuantos privilegiados acaparen todos los juicios.

**Sr. Gibert.** — Pido la palabra.



Se ha pretendido abultar esa argumentación de la garantía que significa el depósito en dinero para los valiosos intereses que tienen en su mano los procuradores y que llegan a muchos millones de pesos. Pero pregunto yo: ¿esos millones de pesos serán garantizados con el depósito de cinco mil pesos que se fija en el proyecto?

**Sr. Rodríguez (A).** — Es para las costas.

**Sr. Gibert.** — Para las costas basta la garantía personal.

**Sr. Escobar.** — Estando suficientemente discutido el punto, podría votarse.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — No habiéndose hecho observación, se dará por aprobada la primera parte del artículo, hasta donde dice cinco mil pesos.

Ahora corresponde votar la suma de cinco mil pesos establecida por el despacho de la comisión. Si no fuera aceptada, se votará la proposición del señor diputado por Buenos Aires, reduciendo esa suma a 3.000 pesos.

—Después de unos momentos de espera para conseguir quórum:

**Sr. Avellaneda (M. A).** — Podríamos pasar a un breve cuarto intermedio.

**Sr. Rodríguez (A).** — ¿Hay número en la casa?

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Sí, señor diputado.

Invito a la cámara a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Son las 5 y 20 p. m.

—Se reanuda la sesión siendo las 5 y 50 p. m.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Habiéndose aprobado la primera parte del inciso 4.º, corresponde votar la suma de 5.000 pesos.

—Se vota, y es aprobada.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Como no se ha observado el resto del inciso, se dará por aprobado.

—Aprobado.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Se

votará el agregado propuesto por el señor diputado por la capital, doctor Melo, que se va a leer.

**Sr. Secretario (Zambrano).** — “... o una primera hipoteca por la misma suma, o dar fianza de persona de responsabilidad comprobada, por esa cantidad, fianza que se renovará cada dos años, no pudiendo ser el fiador abogado de la matrícula”.

**Sr. Melo.** — Que se divida en dos partes: lo de la hipoteca y lo de la fianza.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Se va a votar la parte del agregado propuesto por el señor diputado Melo.

**Sr. Maidana.** — La comisión no acepta.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Sí, señor diputado; no acepta. Por eso se vota.

**Sr. González.** — Ya lo he manifestado a nombre de la comisión.

—Se vota: “o una primera hipoteca por la misma suma”, y resulta afirmativa.

**Sr. González.** — Se podría rectificar la votación.

—Rectificada la votación, resulta igualmente afirmativa de 38 votos, sobre 61 señores diputados.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Se va a votar la segunda parte, que se va a leer.

—Se vota: “o dar fianza de persona de responsabilidad comprobada por esa cantidad, fianza que se renovará cada dos años, no pudiendo ser el fiador abogado de la matrícula”, y resulta negativa de 28 votos.

**Sr. Melo.** — Que se rectifique la votación.

—Rectificada la votación, resulta igualmente negativa de 27 votos, sobre 62 señores diputados.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Se da por aprobada, porque no ha sido observada la segunda parte hasta “títulos nacionales” inclusive.

—Se da por aprobado: “En la justicia federal de las provincias y territorios nacionales este de-



pósito será de dos mil pesos moneda nacional o su equivalente en títulos nacionales...”

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — En consideración el agregado propuesto por el mismo señor diputado por la capital, que se va a leer.

**Sr. Secretario** (Zambrano). — El mismo señor diputado Melo propone, como agregado, el mismo que se ha leído, en la primera parte del artículo: “o una primera hipoteca por la misma suma”...

**Sr. Melo.** — Después de títulos nacionales; es lo mismo que en la otra parte.

**Sr. Vergara.** — Ya lo hemos votado.

**Sr. Melo.** — Es el otro párrafo respecto de la justicia de las provincias. Lo que hemos votado es nacional.

—Se vota: “o una primera hipoteca por la misma suma”, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** (Goyeneche). — Se va a votar la segunda parte.

—Se vota: “o dar fianza de persona de responsabilidad comprobada por esa cantidad, fianza que se renovará cada dos años, no pudiendo ser el fiador abogado de la matrícula”, y resulta negativa.

**Sr. Secretario** (Zambrano). — El señor diputado Bravo...

**Sr. Bravo.** — No hay objeto, señor presidente. Retiro mi proposición.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Habiéndose retirado la proposición del señor diputado Bravo, queda sancionado el artículo 3.º

—En discusión el artículo 4º

**Sr. Escobar.** — Pido la palabra.

Para proponer una nueva redacción de este artículo en la siguiente forma: “Podrán ser inscriptos en la matrícula de procuradores los que a la promulgación de la presente ley hubieren desempeñado por más de diez años empleos judiciales de actuación en los tribunales de la capital, de la justicia ordinaria o federal; deberán solicitar su inscripción dentro de los seis meses, comprobando el buen desempeño de sus funciones, con el justificativo

legal del hecho enunciado y el certificado del depósito requerido por el artículo anterior”.

Propongo esta modificación, porque si no habría dos clases de procuradores en la forma que está redactado el artículo: los diplomados de la universidad y los que desempeñen cargos en los tribunales durante diez años, término que sería indefinido, si no se establece que es por una sola vez, y para los que se encuentren en las condiciones que el mismo artículo determina.

En la forma que propongo se aclara el concepto y queda especificado de una manera terminante el alcance de la disposición.

**Sr. González.** — Pido la palabra.

La comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires, porque el pensamiento expresado encuadra perfectamente en el concepto que ha inspirado este despacho.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Habiendo aceptado la comisión la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires, ésta forma parte del despacho.

Se va a leer el artículo tal como se va a votar.

—Se lee:

“Podrán ser inscriptos en la matrícula de procuradores los que a la promulgación de la presente ley hubieren desempeñado por más de diez años empleos judiciales de actuación en los tribunales de la capital, los que deberán solicitar su inscripción dentro de los seis meses, comprobando el buen desempeño de sus funciones con el justificativo legal del hecho enunciado y el certificado del depósito requerido por el artículo anterior.”

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — No haciéndose uso de la palabra se va a votar si se aprueba el artículo leído.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — En discusión el artículo 5º.

**Sr. Vergara.** — Pido la palabra.

Voy a proponer una modificación que creo va a ser aceptada por la comisión de justicia.

Establece el artículo 5º, en su primera parte, que no podrán inscribir-



se en el registro de procuradores los que hubiesen sido condenados a penitenciaría, presidio o cualquier pena por delitos contra la propiedad o contra la administración o la fe pública.

Yo propongo también un agregado que diga lo siguiente: "lo mismo que las falsedades y las falsificaciones".

Es sabido señor presidente, que estos delitos no están castigados ni con presidio ni con penitenciaría en el código penal y, sin embargo, son delitos que cometidos por un procurador tienen la más alta importancia. Yo no concibo que pueda ser procurador una persona que haya sido condenada por falso testimonio o haya hecho falsificaciones de firmas o sellos; sin embargo, estos delitos por el código penal están castigados con pena de prisión, y ahora resultaría que podrían ser procuradores desde el momento que no les alcanza la prohibición, la que únicamente contempla los delitos que tengan pena de presidio o penitenciaría.

En atención a estas razones, que creo son muy fundamentales, yo solicito de la comisión que acepte el agregado que propongo.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Pido la palabra.

La comisión mantiene su despacho.

La observación del señor diputado no tiene base suficiente, porque según el artículo 5.º están excluidos no solamente los condenados a penitenciaría o presidio, sino también los condenados por delitos contra la administración pública, la propiedad o la fe pública; y en estos están incluídas todas las falsificaciones de documentos, de billetes de banco, etcétera, etcétera, en una palabra, todas las falsificaciones y falsedades.

**Sr. Vergara.** — Pido la palabra.

El señor diputado no puede decir que un delito por falso testimonio está incluído en semejante clasificación puesto que ésta no existe en el código penal. Por el código penal el falso testimonio es castigado con pena distinta según sea materia criminal o civil; en materia criminal según la pena a que el acusado sea condenado; y en mate-

ria civil si el valor de lo ocasionado pasa de mil pesos, con prisión y si es menos de mil pesos se castiga con pena de arresto. De manera que ¿cómo puede ser procurador una persona que ha sido condenada por falso testimonio?

**Sr. Maidana.** — Yo creo que el señor miembro informante de la comisión podría aceptar la indicación del señor diputado por Buenos Aires porque es aclaratoria del pensamiento que informa el artículo.

**Sr. González.** — Pido la palabra.

Lamento tener que discrepar con mi distinguido colega de la comisión para aceptar por mi parte y como miembro de la misma, el agregado propuesto, porque aclara perfectamente la situación a que él se ha referido.

**Sr. Gibert.** — Dada la redacción del artículo me parece que hay un error de interpretación por parte del señor diputado por Buenos Aires, desde que no se limita sólo a las penas de penitenciaría y presidio cuando establece "o a cualquier pena".

**Sr. Vergara.** — Por delitos contra la propiedad, etc.; de manera que no es el caso de falso testimonio.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Maidana.** — La comisión ha aceptado a excepción del señor diputado por Santiago.

**Sr. Jiménez Beltrán.** — Yo no acepto el agregado.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — No habiéndose hecho observación al despacho de la comisión, se da por aprobado.

Corresponde votar el agregado del señor diputado por Buenos Aires, de que se dará lectura.

—Se lee:

"Lo mismo que las falsedades y las falsificaciones."

—Resulta aprobado.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — queda sancionado el inciso 1.º con el agregado votado.

En discusión el inciso 2.º

**Sr. Melo.** — Este inciso debe po-



nerse de acuerdo con el inciso 3.º del artículo 1.º que se votó, expresando "por los escribanos nacionales que no ejerzan la profesión de tales".

**Sr. Presidente.** (Goyeneche). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. González.**—Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Habiendo sido aceptado por la comisión queda incorporado al despacho, y no habiendo observación queda éste aprobado.

En discusión el inciso 3.º.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

Para solicitar de la comisión una aclaración respecto del alcance de este inciso: si comprende a los empleados nacionales exclusivamente o a los nacionales y a los provinciales.

**Sr. González.** — Se refiere a todos los empleados nacionales y provinciales.

Como lo expresó el señor miembro de la comisión, doctor Jiménez Beltrán, esta ley va a tener aplicación en todo el territorio de la república, en las provincias en el fuero federal y comprende, entonces, también a los empleados y funcionarios públicos provinciales, que estarán inhabilitados para actuar en el fuero federal.

**Sr. Bermúdez.** — Propongo que se ponga "empleados públicos nacionales y provinciales"

**Sr. Bravo.** — ¿Y los empleados municipales?

**Sr. Bermúdez.** — Están comprendidos entre los provinciales; de manera que basta con poner "provinciales".

**Sr. Maidana.** — Las municipalidades son autónomas...

**Sr. Bermúdez.** — Pero forman parte del poder público provincial.

**Sr. Maidana.**—Podría ponerse "empleados públicos provinciales y municipales".

**Sr. González.**—Creo que no hay necesidad de introducir el agregado. El inciso dice: "los funcionarios o empleados públicos", sin hacer distinción de ninguna especie, y entonces se refiere a todos los que revistan esa calidad.

De manera que considero innecesario

rio el agregado, pues implica una redundancia que conviene evitar en la ley.

**Sr. Bermúdez.** — La prueba de que puede interpretarse vagamente el inciso es que yo he formulado la pregunta y no veo inconveniente en que se haga la mención de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales.

**Sr. Rodríguez (A.)** — Con la aclaración del señor miembro informante es lo mismo.

**Sr. Bermúdez.** — No es lo mismo porque tiene que venirse al origen de la discusión de la ley, en el caso de dificultad de su interpretación.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — ¿Acepta la comisión el agregado?

**Sr. González.** — Por razones, diría, de estética, de buen gusto, que conviene también cuidar en la redacción de las leyes, y en el deseo de evitar una redundancia, sostendré el despacho de la comisión, porque me parece que lo que el señor diputado propone está expresamente establecido en la ley.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — No habiendo sido objetado el artículo en discusión, se dará por aprobado.

Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por Corrientes.

—Es aprobado.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — En consecuencia el artículo 3.º queda en la forma que se va a leer:

—Se lee:

"Los funcionarios o empleados públicos nacionales, provinciales o municipales."

—En discusión el artículo 6º

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Me parece que este artículo acuerda facultades discrecionales a los jueces y pone a los procuradores en sus manos. Los jueces deben tener en realidad una vigilancia, pero no el arbitrio de la eliminación de la matrícula en esa forma, que se presta a toda clase de injusticias, pues cualquier juez puede hacerse llevar denuncias



contra un procurador a quien quiera mal.

Propongo que se agregue después de la expresión "inhabilidad de la persona" lo siguiente: "decretará su suspensión de la matrícula poniendo el hecho en conocimiento del superior tribunal local, a fin de que decrete la eliminación de la matrícula si corresponde".

**Sr. Rodríguez (A.)** — Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que la cámara debe votar el despacho tal como ha sido proyectado. Este artículo en ningún caso significaría un peligro, y ningún juez, por mero gusto, quitará la matrícula a un procurador.

Lo que asegura la eficacia de la ley son estas cláusulas penales, y nadie está en mejores condiciones de apreciar la conducta y la moralidad de los procuradores que los mismos jueces.

Yo creo en la justicia de mi país y no puedo admitir ni la hipótesis remota de que puedan los jueces convertir esta facultad en un instrumento de venganza o de apasionamiento.

Por estas razones votaré el artículo.

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — Pido la palabra.

Voy a agregar algunas consideraciones a las enunciadas por el señor diputado preopinante.

No creo que sea tan grave la facultad dada a los jueces como la encuentra el señor diputado por la capital, toda vez que la resolución del juez es apelable, y además porque en el artículo 8.º se establecen los casos en los cuales un procurador puede ser eliminado de la matrícula; de manera que el juez no tiene sino un derecho bien restringido.

**Sr. Videla.** — Hay otra razón más todavía. No debemos olvidar que si en mano de los jueces está el honor la vida y la propiedad de los ciudadanos, nada tiene de extraño que estuvieran también investidos de esta facultad que les acuerda el artículo.

**Sr. González.** — En el caso de que la suprema corte revocara la resolución de primera instancia, en definitiva sería la suspensión...

**Sr. Bravo.** — ¿Qué tiene que hacer la corte en este caso?

**Sr. Bermúdez.** — Es que se la constituye en tribunal de apelación.

**Sr. Melo.** — Voy a explicar el motivo de mi proposición.

Yo no quiero quitar nada de manos de los jueces, puesto que son jueces los que van a resolver también en los superiores tribunales. Lo que quiero es quitar de las manos de cualquier juez, que por cualquier motivo puede encontrarse prevenido contra un procurador, que pueda hacerlo víctima de una injusticia, haciéndolo denunciar ante su juzgado por algún paniaguado suyo.

Quiero que sean los tribunales superiores locales los que conozcan del hecho sin que hayan producido otra cosa que la suspensión, para que pese sobre ellos la responsabilidad de la eliminación, en cuyo caso estudiarán el expediente; porque a veces, cuando va un asunto en apelación los tribunales superiores, se atienen a lo que está ya hecho sin mayor examen y sucede que resoluciones sin fundamentos de primera instancia se confirman por sus fundamentos.

**Varios señores diputados** — ¡No! ¡no!

**Sr. Melo.** — Lo que yo quiero es que se estudie seriamente y directamente el caso por el superior tribunal, y sea él solo el responsable de la eliminación de la matrícula del procurador.

**Sr. Maidana.** — Es un cargo que hace contra los tribunales de apelación.

**Sr. Melo.** — Es una verdad humana, señor; no es un cargo contra todos los tribunales de apelación. Los señores diputados que trabajan como abogados, podrán como yo citar casos en que autos confirmados por sus fundamentos no los tenían — por lo menos jurídicamente.

**Sr. Maidana.** — Sería caso de promover juicio político contra esos magistrados que no cumplen con su deber.

**Sr. Melo.** — El juicio político es un instrumento delicado que debe usarse



tan sólo en los casos graves y siempre oportunamente. Ya hablaremos.

**Sr. Maidana.** — Si el señor diputado me denuncia un caso, yo lo propongo.

**Sr. Melo.** — Yo no vengo a traer los agravios recibidos en el ejercicio de mi profesión al recinto de las leyes.

**Sr. Maidana.** — Desde luego, señor diputado.

**Varicos señores diputados.** — Que se vote.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Se va a votar — dándose previamente por aprobado el artículo 6.º, hasta la palabra “ley”, inclusive, — “decretará su eliminación de la matrícula”. Si fuere aceptado el despacho de la comisión en esa parte, no tendría objeto la proposición del señor diputado.

**Sr. Bravo.** — La proposición del señor diputado Melo dice: “decretará su suspensión de la matrícula”.

**Sr. Melo.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Se va a votar el despacho de la comisión, y en caso de que fuera rechazada esa parte...

**Sr. Bravo.** — Sí, señor presidente; conozco el mecanismo de la votación.

—Se vota el despacho de la comisión, y es aprobado.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — queda por aprobado el resto del artículo. Está en discusión el artículo 7.º

**Sr. Vergara.** — Pido la palabra.

El artículo 7.º, señor presidente, está concebido en una forma que creo debe llamar especialmente la atención de los señores diputados. Establece que el depósito que los procuradores deben efectuar en virtud de esta ley servirá para garantizar el pago de las costas judiciales a que su parte estuviera obligada. De manera que al procurador se le hace responsable con la fianza, por las costas en que pueda incurrir la parte que patrocinada. Yo pienso que esta es una disposición inaceptable desde todo punto de vista.

El procurador debe únicamente res-

ponsabilizarse de los daños, de los hechos, de las omisiones y de las faltas en que él directamente incurra durante la tramitación del pleito, pero nunca puede cargar con los honorarios y con las costas que pueda devengar la parte contraria. Si se admitiera este temperamento, creo que serían muy pocos los procuradores que se atrevieran a tramitar un juicio, porque no estarían dispuestos a cargar con todas las costas judiciales, en el supuesto de una insolvencia o de una mala fe de su cliente.

El miembro informante nos decía que el procurador, al tomar un asunto, puede investigar el estado de solvencia de la persona que patrocina. Yo estoy de acuerdo con esto. Pero no hay que olvidar que esa persona, durante la secuela del juicio, puede perfectamente cambiar de responsabilidad; y más aún: puede cometer el acto deshonesto de transferir sus propios bienes y encontrarse al final de la contienda el procurador con que no se pueden hacer efectivas las costas. El cliente entonces quiere responsabilizarse personalmente. Se me ocurre que se puede decir que el procurador puede pedir el importe de una suma determinada con anticipación; pero yo que soy abogado y que conozco prácticamente estas cosas, no ignoro que el abogado que pide al cliente con anticipación para costas y gastos causídicos en general comete una verdadera irregularidad en mi modo de encarar la profesión. Y sobre todo, si se le obliga al procurador a garantizarse en esa forma, si al final de la cuestión ganara el pleito habría sido completamente inútil obligarlo a eso.

Y llegaríamos, extremando la argumentación a que los pobres en general no podrían litigar por más derecho y razón que tengan.

**Sr. Bravo.** — ¿Me permite el señor diputado...?

Los pobres podrían litigar valiéndose de un abogado, porque a los abogados no se les exige, para ejercer la profesión ningún requisito.

**Sr. Vergara.** — Yo no quiero que esta ley tergiversa el rol y el motivo



fundamental del procurador. El abogado no debe ser procurador. Entiendo que la ley debe ser interpretada en forma correcta. Son funciones distintas. El señor diputado, que es un distinguido abogado, sabe perfectamente bien que el abogado no debe aceptar poderes.

**Sr. Bravo.** — La ley lo autoriza.

**Sr. Rodríguez (A.)** — Deben estar en las mismas condiciones.

**Sr. Vergara.** — Con una disposición semejante, los pobres, los hombres insolventes, que también pueden tener derechos muy legítimos que discutir ante la justicia, no encontrarán fácilmente personas que los representen, porque ningún abogado ni procurador puede decir de antemano que fatalmente va a salir bien en la contienda. Por más derecho que parezca que tenga el asunto está entregado a las eventualidades del juicio y también al criterio judicial, que algunas veces difiere del criterio de uno. Esas personas no encontrarán quien los represente, y ese sería un inconveniente más o menos parecido al que han tenido los codificadores en materia procesal para no establecer la fianza de resultas o excepción de arraigo. ¿Por qué? Para que los pobres puedan litigar, y entonces se vendría aquí a desvirtuar el caso de fianza de resultas.

Propongo el artículo en esta forma: "El depósito a que se refiere el inciso 4.º, del artículo 3.º, garantiza no sólo las responsabilidades del procurador para con sus mandantes por faltas, omisiones o delitos en el desempeño de su función, sino el pago de multas o costas cuando proceda a responsabilizarlo personalmente de sus propios actos".

En esta forma que no es una novedad, que está sancionado en varios códigos de provincia y entre ellos en el código de la provincia de Buenos Aires, los procuradores no se responsabilizan por las costas causídicas en que pueden ser condenadas sus propias partes, sino que se responsabilizan simplemente por las faltas, omisiones o delitos en que puedan incu-

rrir. Hasta ahí únicamente llega su responsabilidad, y hasta ahí solamente se puede hacer efectiva en el depósito o fianza que la ley le obliga a hacer.

—Los señores diputados Gibert y González solicitan la palabra.

**Sr. González.** — Es para hablar a nombre de la comisión.

**Sr. Gibert.** — Era precisamente para reforzar la argumentación del señor diputado Vergara.

**Sr. González.** — Se la cedo al señor diputado.

**Sr. Gibert.** — En la sesión anterior ya dejé expresado mi pensamiento en el sentido de que encontraba que en esta ley se le daba una extensión mayor que la que corresponde a la responsabilidad del procurador.

De manera que estoy en un todo de acuerdo con lo expresado por el señor diputado Vergara, así como en su redacción; y sólo quisiera agregar otro argumento más que nace de la textura de la propia ley y de los principios consagrados por la misma legislación que estamos votando.

En el artículo 11 inciso 3.º, tenemos entre los deberes de los procuradores: presentar los escritos, debiendo llevar firma de letrado los de demanda, oposición de excepciones y sus contestaciones, los alegatos y expresiones de agravios, los pliegos de posiciones e interrogatorios, aquellos en que se promuevan incidentes en los juicios y, en general, todos los que sustenten o controviertan derechos, ya sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa.

De manera que la misma ley obliga a los procuradores a valerse de dirección letrada en todo lo que los juicios tienen de fundamental, en todo aquello en que, como principal o como incidente, lleva necesariamente la condenación en costas para el vencido. Si el procurador se ve obligado a tomar dirección letrada y si es el letrado el que hace la cuestión, ¿cómo es posible que la responsabilidad de esa cuestión recaiga pecuniariamente sobre el procurador? De ninguna manera. Si fuera condenado el letrado



estaría perfectamente; pero aquí es el procurador el que tiene que valerse de su dirección, y es indudable que el procurador no puede oponerle limitaciones, porque el letrado le diría que se busque otro que lo patrocine.

En el mismo artículo 11, inciso 1.º, se establece también como deberes de los procuradores interponer los recursos legales contra toda sentencia definitiva adversa a su parte y contra toda regulación de honorarios que corresponda abonar a la misma, etcétera.

De manera que la ley obliga a un procurador que ha perdido un pleito en primera instancia a interponer el recurso de apelación. Supongamos que el pleito se ha perdido porque el cliente mintió o porque no proporcionó los medios de prueba que dijo disponía o porque no los tuvo, y que al fallarse el juicio el abogado y el procurador estén convencidos de que la sentencia es fundada. Sin embargo la ley obliga al procurador a apelar. En segunda instancia se producen nuevos gastos y la ley obliga al procurador a cargar con ellos, cuando sabe de antemano que van a ser impuestos.

**Sr. Bermúdez.** — Y que los ha ocasionado él por el mandato de la ley de que apele.

**Sr. Gibert.** — Por eso mismo.

De manera que creo que esa responsabilidad es excesiva y debe limitarse a la expresada por el señor diputado Vergara.

**Sr. González.** — Pido la palabra.

Me parece que sería de mal gusto y que importaría una desconsideración hacia la cámara repetir todos los argumentos que expuse extensamente en favor de esta disposición al informar en general el despacho que se discute.

Me refiero en un todo a las razones que aduje en esa oportunidad para sostener el despacho, y me limito a decir a nombre de la comisión que ella no puede aceptar la enmienda solicitada por el señor diputado por la provincia de Buenos Aires.

**Sr. Rodríguez (A.)** — Pido la palabra.

Para apoyar la indicación hecha por el señor diputado Vergara.

Me parece sumamente atinada, y creo que en esas condiciones, como se halla la ley en la provincia de Buenos Aires, queda perfectamente de acuerdo con el criterio sano que debe adoptar una ley de saneamiento de la procuración como es esta.

Además, señor presidente, creo que la comisión no ha de tener inconveniente en aceptar un inciso nuevo por el cual los abogados, cuando hagan de apoderados en los juicios, se encontrarán en las mismas condiciones de responsabilidad que los procuradores cuyas funciones quedarán sometidas a las disposiciones de esta ley. Conozco muchísimos casos de estudios importantes cuyos jefes tienen hijos que, siendo abogados, actúan como procuradores, y como esto no me parece bien, propongo que cuando los abogados hagan de procuradores queden sometidos a las mismas condiciones y responsabilidades que los demás procuradores.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

Voy a agregar un argumento más. Sancionaríamos una iniquidad si no aceptásemos la proposición del señor diputado por Buenos Aires porque de otra manera los procuradores cargarán con la responsabilidad pecuniaria de errores que no les corresponden.

Se sabe perfectamente en la práctica que los que dirigen los pleitos son los abogados y que los procuradores no son sino sumisos obedientes de los abogados. Si en la tramitación de un asunto un abogado comete un error por el cual se haga pasible de una pena pecuniaria al procurador, cargará éste con una responsabilidad que no le corresponde, porque ese error es exclusivo del abogado; estoy seguro que en el noventa por ciento de los casos es esta la realidad.

Nada más.

**Sr. Vergara.** — Pido la palabra.

Para una rectificación.

Las palabras del señor miembro informante de la comisión hacen referencia al informe por él producido



en la sesión de ayer. Yo he leído ese informe, y creo que el señor diputado ha incurrido en un error al entrar en ciertas apreciaciones respecto a lo que pasa con la procuración en algunos países de Europa, al tratar de aplicarlas a nuestro ambiente.

Es sabido que en varios países de Europa el procurador tiene un papel importantísimo. Con él se entiende directamente el cliente, a él le da los poderes, las instrucciones, y viene así a ser ese procurador casi el dueño exclusivo del pleito. Pero entre nosotros no ocurre lo mismo, por lo menos hasta este momento; entre nosotros el cliente se entiende directamente con el abogado; el abogado se hace cargo del asunto y designa generalmente al procurador que debe representar a la persona cuyo asunto va a dirigir.

De manera que la aplicación de lo que pasa en Europa, entre nosotros es inadecuada. Hace pocos días leí en un tratado español sobre el ejercicio de esta profesión, que el cliente en la mayoría de los casos no conoce al abogado; que es el procurador quien va y solicita al abogado ciertas y determinadas diligencias de acuerdo con la ley procesal, por ejemplo un alegato, un consejo jurídico, un informe *in voce*. Se explica entonces que allí pueda imponerse al procurador la obligación de cargar con las costas, porque él es el dueño del asunto, conoce el cliente, etcétera, etcétera; pero entre nosotros, es al abogado a quien se le confía la dirección del juicio y él a su vez encarga a un tercero la procuración.

Resultan así mucho más explicables las razones que dí para que se suprimiera esta parte del proyecto y se reemplazara por la que acabo de proponer.

Nada más.

**Sr. González.** — Pido la palabra.

Necesito hacerme cargo del argumento presentado por el señor diputado por Buenos Aires, porque parece que las consideraciones que aduje al fundar el despacho de la comisión no han llegado a persuadirle.

Es necesario dejar bien establecidos estos dos conceptos: la responsabilidad civil que se asume en los juicios y la dirección intelectual de los mismos.

La parte intelectual, la parte directiva de la tramitación de los asuntos, corresponde al abogado. Para el buen orden de la justicia, el despacho de la comisión exige que todo escrito que no sea de mero trámite lleve indispensablemente firma de letrado.

A ese objeto responde la disposición pertinente del despacho de la comisión.

Con respecto a la responsabilidad pecuniaria en los juicios, la comisión ha creído necesario garantizarla de una manera plena. Muchas veces, como ya lo había dicho al informar en general, se ve la parte en el caso de afrontar un pleito largo y costoso; resulta vencedora en el juicio y le es imposible hacer efectiva la responsabilidad de su contrario, cobrar las costas, porque es insolvente. Es así que muchas veces se han burlado los más legítimos derechos y las sanciones de la justicia, y se ha pretendido...

**Sr. Fernández.** — ¿Si me permite el señor diputado?

Para eso podría esperarse la modificación de la ley de procedimientos y establecer el arraigo para todos los casos, y no hacerle cargar al procurador con las responsabilidades del resultado de los juicios.

**Sr. González.** — Esta disposición del despacho de la comisión no constituye una novedad; la registran la mayor parte de las leyes vigentes que reglamentan el ejercicio de la procuración en el país, con excepción de la ley de la provincia de Buenos Aires, a que se ha referido el señor diputado Vergara...

**Sr. Vergara.** — La tiene la provincia de Entre Ríos, y no obstante lo que manifestó ayer el señor diputado Daneri, no ha dado resultado.

**Sr. González.** — El señor diputado Daneri ha manifestado que la ley reglamentaria del ejercicio de la procuración había dado en Entre Ríos los más fecundos resultados y que a ellos



se atenía para dar su voto favorable al despacho de la comisión. El señor diputado por Entre Ríos nos traía el valioso concurso de su experiencia profesional.

**Sr. Bermúdez.** — Para votarlo en general, señor diputado.

**Sr. González.** — Es necesario tener en cuenta los efectos que la legislación haya producido en el país.

Necesario es tener en vista que leyes reglamentarias del ejercicio de la procuración, como las de Entre Ríos, Córdoba, San Juan y San Luis, contienen el mismo precepto propuesto por el despacho de la comisión de justicia.

**Sr. Rodríguez (A.).** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. González.** — Lamento no concedérsela al señor diputado, porque no podría continuar ordenadamente mi exposición.

La ley reglamentaria del ejercicio de la procuración en la provincia de Santa Fe, contenía también este precepto, que fué derogado hace poco tiempo; pero durante un largo período estuvo en vigencia allí.

Tenemos entonces, señor presidente, que este despacho, como decía, no engendra una novedad en la legislación sobre la materia. Se trata de una disposición abonada por la experiencia, por los precedentes adoptados en la legislación de diversas provincias argentinas. Ella tiende a asegurar perfectamente la responsabilidad pecuniaria en los juicios, para evitar lo que se ha producido durante tanto tiempo: la imposibilidad de hacer efectiva esa responsabilidad en virtud de que muchas veces las partes litigantes son insolventes o se han valido de maniobras dolosas o dilatorias para imponer el pago de las costas.

Entiendo que la observación del señor diputado, no se refiere a la parte de responsabilidad pecuniaria inherente a las relaciones del mandatario con su mandante...

**Sr. Vergara.** — Lo he manifestado claramente.

**Sr. González.** ... sino en lo que se refiere a las relaciones de las partes litigantes en el juicio, y siendo así, el

depósito sólo debería asegurar la responsabilidad por los costos y costas, empleando los términos tradicionales del derecho, es decir, los gastos que se produzcan y los honorarios impuestos a la parte vencida. Si es así, no veo inconveniente para que se mantenga el despacho de la comisión.

Por otra parte, la disposición en debate no podrá interpretarse en un sentido excesivo, porque sus términos son perfectamente claros.

Quando la ley se refiere a las costas, alude a los honorarios del procurador y del abogado de la parte vencedora y a los gastos causídicos. Tal es el sentido del artículo.

**Sr. Gibert.** — Exactamente, en ese concepto me he expresado.

**Sr. González.** — Esta disposición se refiere, pues, sólo a las relaciones de las partes litigantes en el juicio, para asegurar la responsabilidad pecuniaria de la parte vencida, imponiendo al procurador el pago de las costas si no lo efectuara el mandante.

En lo referente a las relaciones del mandante con el procurador, el depósito servirá también para hacer efectivas las indemnizaciones por mal desempeño del mandato.

Por eso, como decía, señor presidente, es necesario dejar bien definidas estas dos situaciones: la parte directiva, la parte intelectual de la tramitación de los asuntos, y la responsabilidad pecuniaria de los litigantes en el juicio, y estimo que el despacho de la comisión contempla esos aspectos y los encuadra en los dictados de la justicia y los precedentes de la legislación en la materia.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

**Sr. Rodríguez (A.).** — Pido la palabra, para una aclaración.

Como en el debate se ha nombrado al señor diputado Daneri, con motivo de la observación que había hecho de la ley de Entre Ríos, debo decir dos palabras. El señor diputado Daneri ha tenido que ausentarse a Entre Ríos por razones personales, y me ha dejado, entre las modificaciones, solamente la referente al depósito, la que se refiere al juramento y otra respecto de los diez a cinco años. Me



ha dicho, asimismo, el señor diputado Daneri que encontraba él perfectamente justificada la observación que hoy hace el señor diputado por Buenos Aires, porque era donde no había dado resultados en Entre Ríos.

**Sr. Vergara.** — Es lo que le iba a decir al señor diputado. Yo conozco...

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Bermúdez.** — El señor miembro informante de la comisión ha explicado en una forma no muy clara, a mi juicio, el alcance de esta disposición. Yo creo que el texto del artículo que se está discutiendo es expreso y terminante, cuando dice que el depósito a que se refiere el inciso 4.º del artículo 3.º garantiza el pago de las costas judiciales a que su parte estuviera obligada.

Quiero poner un ejemplo: se entabla un juicio por una persona insolvente, que se cree con derecho a una propiedad y que litiga con el poseedor o con el que aparece como dueño de la propiedad, y un procurador o un abogado aceptan el pleito en la creencia o en la convicción de que pueden ganarlo, pero después pierden el pleito. ¿Por qué se va a responsabilizar al procurador para responder de los gastos judiciales a que su mandante está obligado, con su depósito de garantía, cuando él no es el culpable de la pérdida del pleito y cuando él lo ha aceptado en el concepto de que podía tener derecho?

Me parece, señor presidente, que el artículo de la comisión, tal como está redactado, contiene un verdadero fondo de injusticia, porque no se puede responsabilizar al procurador por las costas y gastos judiciales que pudieran corresponder a su mandante. Está bien que se le responsabilice de lo que él sea culpable por mal desempeño de sus funciones o por faltas cometidas, pero no por lo que corresponda pagar a terceros, como son sus mandantes.

Por eso, señor presidente, yo creo que es preferible aceptar la forma propuesta por el señor diputado por Buenos Aires, que prevé todos los ca-

sos y que hace desaparecer esta injusticia, porque no es posible hacer recaer sobre el haber del procurador gastos que no le corresponden.

**Sr. Maidana.** — Le voy a contestar.

**Sr. González.** — ¿Si me permite?...

Para esa situación, el procurador, antes de aceptar el poder y de promover un juicio, debe asegurarse, como ya había dicho, de la responsabilidad pecuniaria de su mandante o exigir la provisión de expensas para el juicio.

**Sr. Bermúdez.** — Póngase el señor diputado en el caso que cito: de que sea una persona enteramente pobre y que pretenda reivindicar una tierra que cree suya, pero que no tiene absolutamente nada, y que el abogado y el procurador que aceptan el pleito creen que tiene derecho y van absolutamente de buena fe a defenderlo, y sin embargo, pierden el pleito por cualquier circunstancia. ¿Qué hace en ese caso el señor diputado?

**Sr. Rodríguez (A.).** — Desearía preguntar si hay número.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — No hay número en la casa.

**Sr. González.** — Podríamos dejar terminada la discusión, y votarlo en otra sesión.

**Sr. Maidana.** — Pido la palabra.

Voy a sostener el artículo 7.º tal cual está redactado en el despacho formulado por la comisión. Y es necesario decir algunas palabras, porque yo entiendo que el informe del señor diputado por Corrientes no fué escuchado en la sesión anterior por muchos señores diputados, por hallarse ausentes del recinto o por cualquier otra causa involuntaria.

El concepto que encierra este artículo es responsabilizar a la parte vencida, es decir, al apoderado, de los gastos que a su instancia se originen en los juicios, lo que es de estricta justicia.

No todos los asuntos se ganan, porque puede haber en los directores de los asuntos un concepto equivocado del derecho o fallarles las pruebas; en cuyo caso no queda demostrada la existencia del derecho reclamado y se impone una sentencia condenatoria. Pero no todas las sentencias condena-



torias son con costas, porque muchas veces hay razones plausibles para litigar, y en este caso los jueces fallan en contra de un individuo que ha entablado una demanda contra otro, pero sin imponer las costas que significan un freno o un castigo a la mala fe.

Hay que tener un concepto de lo que son las costas judiciales. Las costas judiciales son una especie de pena que los jueces aplican a los litigantes de mala fe, a aquellos que en el desarrollo del juicio han demostrado en una forma casi evidente que no tienen una razón plausible para litigar; de manera entonces que al responsabilizar a los apoderados de los gastos que se originan en los juicios no se hace más que sancionar un gran principio de justicia.

El abogado que dirige los juicios, como el apoderado que recibe un poder, antes de iniciar una demanda deben estudiar el asunto y, sobre todo, examinar la prueba con que se cuenta para justificar o afianzar el derecho que se invoca en la demanda. Un abogado o un procurador, cuando son honrados y capaces, en la inmensa mayoría de los casos están convencidos, cuando inician un juicio, de que sostienen una causa o un derecho legítimo. En este caso, el juez no los condena en costas aunque pierdan el pleito, porque ha habido razón plausible para litigar y el pleito puede haberse perdido por falta de documentación o de prueba plena, pero no por mala fe de los que lo iniciaron.

Las costas, como ya lo he dicho, son una pena para el litigante de mala fe; de manera que solamente se imponen a éste. Los malos litigantes, que discuten derechos completamente ilegítimos o inexistentes, son verdaderos aventureros que no solamente perjudican a las gentes honestas sino también entorpecen la justicia, dado que nuestros tribunales están llenos de pleitos insignificantes e injustos, precisamente porque no hay esta sanción moral y real contra los malos procuradores y los malos abogados que reciben cualquier clase de asuntos por temerarios que ellos sean.

Por estas razones hay que distin-

guir muy bien lo que significa el pensamiento que encierra este artículo 7.º, que ha sido perfectamente fundado por la comisión en su informe respectivo. Las costas son un freno para que en nuestros juzgados no se inicien demandas injustas y, sobre todo, para hacer que la justicia sea rápida, como es el ideal de los códigos de procedimientos; para que los cuantiosos intereses en litigio no se paralicen por la mala fe de abogados y procuradores que producen múltiples incidencias que detienen hasta lo infinito el fallo de los jueces.

En efecto; muchas veces para extorsionar a la gente honrada y detener la llegada del fallo condenatorio, se provocan todas esas incidencias que exigen erogaciones en honorarios de abogados, en gastos de sellado y demás diligencias judiciales; todo lo cual podría evitarse con la sanción de las costas a los procuradores que interpusieron de mala fe, con propósitos dilatorios, esos incidentes, y sin los cuales ningún litigio duraría más tiempo que el señalado por la ley procesal en su tramitación.

Pero todo lo contrario pasa, desgraciadamente, en la vida práctica de nuestros tribunales. Existen allí los llamados *aves negras*, que son hombres de mala fe, que aceptan asuntos sucios para molestar, extorsionar o perjudicar a la gente honrada. Una simple estadística demostraría que los asuntos que se fallan en contra, por carecer en absoluto de derecho, alcanzan a un cuarenta por ciento, y es a evitar esto y a castigar a los que los inician, a lo que tiende este artículo. Se castigará así a los apoderados y a los abogados que inicien demandas injustas contra personas honestas, con el objeto de extorsionarlos, para obligarlos a una transacción, que muchas veces éstas tienen que aceptar para evitarse todas las molestias de los juicios largos, engorrosos y muy costosos, sin esperanzas de reembolso.

En efecto: es de imaginarse la situación de un hombre honesto y de responsabilidad material y moral que, demandado por gente de mala fe, gane el asunto y lo condenen en las cos-



tas al aventurero: ¿quién le responde a ese hombre honrado de los sacrificios que ha hecho para defender legítimamente su derecho, de todas las erogaciones que ha tenido que hacer y de las molestias que le han sido irrogadas?

A eso tiende la sanción de este artículo: a castigar con las costas al litigante de mala fe, porque al de buena fe nunca se le condena en costas.

De manera que para castigar la mala fe, para sanear nuestros tribunales, se impone la sanción de este artículo, con lo cual se obtendrá también que los jueces ganen muchísimo tiempo, porque no tendrán que intervenir en una gran cantidad de demandas injustas ni en los cientos de incidentes que la chicana judicial inicia a diario, que son tan en boga en los tribunales de la república y que dilatan tanto el fallo definitivo de la justicia. Y todo esto ocurre porque es muy fácil litigar al aventurero insolvente, porque el que inicia un pleito injusto no tiene ninguna responsabilidad a su terminación, cuando lo condenen en costas, y entonces prolonga indefini-

damente el juicio con incidentes de toda clase no importándoles nada perderlos. Estos procedimientos constituyen un medio de vida de mucha gente indecorosa, burlando la honestidad de las personas que acuden al tribunal en defensa de sus derechos.

Por estas razones, y para aliviar a nuestra justicia de una cantidad de asuntos que interrumpen su labor serena, es necesario sancionar este artículo, y haremos una obra meritoria e indudablemente bien elevada en el concepto moderno que debe tenerse de la justicia, sobre todo porque no sólo se evita y castiga la aventura y las dilaciones inmotivadas, sino también porque este artículo va a limpiar lo que nosotros queremos que se limpie y sea reluciente: nuestra administración de justicia.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)  
— *Varios diputados felicitan al orador.*

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — La cámara ha quedado sin quórum. Invito a los señores diputados a levantar la sesión.